

Valparaíso, cinco de julio de dos mil diecinueve.

VISTO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Denuncia y contestación. Que ante este Juzgado de Letras del Trabajo de Valparaíso comparece doña **PAULA ANDREA OPAZO BERRÍOS**, abogada, con domicilio en calle San Juan 123, Concón, quien interpone denuncia de tutela laboral por vulneración de derechos fundamentales con ocasión del despido (consistente en la terminación de su contrata); específicamente, por despido discriminatorio, en contra del Fisco de Chile, a través del Consejo de Defensa del Estado, representado por el Abogado Procurador Fiscal de la región de Valparaíso, don Michael Wilkendorf Simpfendorfer, o quien lo subroge legalmente; todos domiciliados en Prat 772, segundo piso, Valparaíso, solicitando acogerla a tramitación y en definitiva, condene al demandado, en atención a los siguientes hechos y antecedentes de derecho.

En cuanto a la relación circunstanciada de los hechos indicó, que fui contratada por el Ministerio Secretaría General de Gobierno con fecha 16 de octubre de 2015, bajo la modalidad a contrata, en el cargo de profesional, grado 8 de la Escala Única de Sueldos (EUS), para desempeñarse en la ciudad de Valparaíso, sin que se le indicara una Unidad o Departamento específico al cual estar adscrita. Así consta en resolución N° 270/166, la que, en su parte pertinente, dispuso que la contratación correría desde el 01 de octubre de 2015 al 31 de diciembre del mismo año, mientras sus servicios fueran necesarios.

Manifestó, que de igual modo, en la misma resolución N° 270/166 se señaló que, por razones impostergables de buen servicio, yo asumiría mis funciones a contar del 01 de octubre de 2015, de conformidad con el artículo 16 del Estatuto Administrativo, sin esperar la total tramitación de la resolución.

Hace presente, que posteriormente, el 27 de noviembre de 2015 y en forma previa a la terminación de su contrata según resolución N° 270/166, el Ministerio Secretaría General de Gobierno le informó de la prórroga de su vinculación en la misma calidad, para hacerse efectiva a contar del 01 de enero de 2016, hasta el 31 de diciembre del mismo año.

Indicó, que de una nueva prórroga se me notificó el 30 de noviembre de 2016, por el periodo que va desde 01 de enero al 31 de diciembre, ambas fechas de 2017. Igual procedimiento ocurrió el 30 de noviembre de 2017, fecha en que se le comunicó la renovación de su contrata, ahora para el periodo que media entre el 01 de enero y 31 de diciembre de 2018. Todas las notificaciones de prórroga de la contrata antes señaladas fueron suscritas por los jefes de recursos humanos del Ministerio Secretaría General de Gobierno, de las respectivas épocas.

Dio cuenta en su demanda como queda en evidencia, el desarrollo continuo de sus labores como funcionaria a contrata durante más de dos años, era un claro signo de estabilidad laboral, que generó en ella la confianza de que dicho vínculo perduraría, cosa que no ocurrió, por las razones que serán explicadas más adelante.

Respecto de los servicios prestados, indicó, que desde un comienzo, las labores para las que fue contratada las desarrolló en Secretaría Regional Ministerial (SEREMI) de Gobierno de la Región de Valparaíso, órgano desconcentrado territorialmente del Ministerio Secretaría General de Gobierno; sin perjuicio que, como señaló, fue contratada para prestar servicios en el Ministerio



propiamente tal. Allí cumplía con el cargo de asesora jurídica, realizando labores tales como apoyar y fiscalizar todos los trámites administrativos relativos a la aplicación del Estatuto Administrativo en la Secretaría Regional Ministerial de Gobierno, ver todas las materias relacionadas con responsabilidad administrativa, sumarios e investigaciones sumarias, tramitación de solicitudes de los otros funcionarios, apoyar a otras unidades como fondos concursables, revisar poderes, convenios y contratos; informar al Consejo de Defensa del Estado el no cumplimiento de parte de adjudicatarios de fondos y demandas o denuncias en contra del servicio; ver solicitudes de otras instituciones públicas, privadas y ciudadanía, responder oficios y hacerles seguimiento, elaborar informes a solicitud de la SEREMI; efectuar reportes jurídicos mensuales a nivel central, etcétera. Cabe destacar que, en el ejercicio de este cargo, nunca estuvo adscrita a alguna unidad específica de la SEREMI.

Añadió, que el lugar de la prestación de sus servicios fue en las dependencias de la SEREMI antes señalada, ubicadas en Melgarejo 669, piso 16, Valparaíso. El horario de prestación de los servicios era de lunes a jueves, de 8:30 a 17:30 horas, y los viernes de 8:30 a 16:30 horas.

Refirió, que su cargo no era de exclusiva confianza, ni del Ministerio ni de la Secretaría Regional Ministerial. Ello era coherente con la calidad jurídica de funcionaria a contrata, así como con las funciones que yo desarrollaba, las que tenían un carácter técnico y administrativo, y para las cuales estaba muy bien calificada, al contar un Diplomado en Derecho Administrativo y un Magister en Derecho Público, ambos obtenidos en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

Sostuvo, que durante su permanencia en el órgano de gobierno fue objeto de dos procesos de calificación -periodos septiembre de 2015 a febrero de 2016 y septiembre 2016 a agosto de 2017-, obteniendo, en ambas evaluaciones, óptimos resultados en cada uno de los ítems considerados (condiciones personales, comportamiento funcionario, competencia y rendimiento, y capacidad de gestión), de modo que fue encasillada en lista 1 de calificación. Sin embargo, desde que asumió la SEREMI actual y hasta la fecha en que se verificó su despido, no se realizaron otros procesos de evaluación.

Manifestó, que en aplicación de lo dispuesto por el artículo 489 inciso 3 del Código del Trabajo, en relación con el artículo 172 del mismo cuerpo legal, el promedio de mis tres últimas remuneraciones fue la suma de \$1.897.801.

Señaló, que como consecuencia de lo anterior y de haberse cumplido el periodo total de su contrata para el presente año, habría percibido una remuneración entre el 16 de junio y el 31 de diciembre de 2018, ascendente a un monto total de \$12.335.706.

Respecto del despido discriminatorio, señaló, que como es bien sabido, a fines de 2017 se efectuaron las elecciones presidenciales, resultando electo el actual presidente, S.E. Sebastián Piñera Echeñique, de tendencia política contraria a la de la anterior administración. Luego, en marzo de 2018 asumió como SEREMI del Ministerio Secretaría General de Gobierno, la Sra. Leslie Briones Rojo (militante de Renovación Nacional), quien reemplazó a en el cargo a don Mario Lagomarsino (PPD); quien, a su turno, había sustituido a doña Katherine Araya (PPD).

Sostuvo, que desde el arribo de la nueva autoridad el cambio en el trato hacia su persona fue patente. En efecto, la nueva SEREMI nunca quiso conocerla



personalmente, pese al número más bien reducido de personal que existía en el interior de la Seremía (comparado con otros servicios o dependencias públicas). Nunca compartió con ella su agenda de trabajo, como sí lo hacían los anteriores SEREMIS para cualquier coordinación que resultara necesaria y, sólo en dos oportunidades, fue invitada a una reunión de equipo de trabajo. De hecho, en la primera de estas reuniones vivió un momento sumamente desagradable, al ser tildada por el Jefe de Gabinete, Jorge Saavedra, como una de “*las rojas*”, en alusión a su posición política. En relación con esto último, ya a esas alturas era absolutamente conocida su tendencia política, cercana al PPD, así como la del resto de sus compañeros designados en el gobierno anterior.

Indicó, que en este mismo orden de ideas, aproximadamente una semana después de la asunción de la Sra. Briones comenzó una verdadera persecución al interior de la SEREMI dirigida a su persona. Para empezar, se le solicitó la entrega de la oficina que, desde el año 2015, había utilizado, trasladándola a otro sector dentro de las dependencias del organismo. Por otra parte, la nueva SEREMI comenzó a solicitarle informes para cada firma que tuviese que realizar para fines propios del servicio y por cada una de las actividades que realizaba, no importando qué tan nimia éstas fuesen. Ello generó un notorio ambiente de desconfianza hacia su labor.

Expresó, que por otra parte, de un minuto a otro dejó de realizar el trabajo que, hasta antes de la llegada de la nueva administración, realizaba; labor que, como dijo, consistía, esencialmente, en la asesoría jurídica directa a la SEREMI. En el mismo sentido, el desarrollo de su trabajo fue continuamente obstaculizado por el jefe de gabinete (Sr. Jorge Saavedra) y otros funcionarios, al negarse los mismos a remitir información cuya gestión era de mi responsabilidad y al disponerse que, cualquier clase de consulta, incluidas aquellas propias de mis funciones, debía hacerla a través del mencionado jefe de gabinete. Esta situación fue puesta por ella en conocimiento de la propia Sra. Briones de forma personal, y a través de correo electrónico remitido a fines del mes de mayo de 2018; sin embargo, ello fue infructuoso, pues la SEREMI no realizó actividad alguna para poner coto y solución a la afectación que sufría. Es importante dejar de manifiesto que toda esa situación causó un grave pesar en mi persona, preocupación constante y estrés que comenté en muchas ocasiones con compañeros de trabajo, y familia, y puse de manifiesto al propio jefe de gabinete, quién no hizo más que desentenderse de aquello, sin tener la más mínima deferencia con su situación.

Manifestó, que además, como testigos diarios de todos estos hechos de discriminación, le causa un gran pesar haber visto sufrir a sus hijos con toda esta situación. Como se lo comenté a varias personas, desde que llegó la nueva administración se sintió como si fuese una persona “*con lepra*”. A vía ejemplar, en mayo de 2018, al salir del restaurante donde estaba almorzando, muy cerca del edificio donde se ubica la SEREMI, se topé de frente con la Sra. Briones y sus dos asesores, todos los cuales, literalmente, voltearon en el acto y subieron por las escaleras hacia las oficinas, de tal forma de no cruzar absolutamente ninguna palabra con ella.

Señaló, que en paralelo, mediante resolución exenta de la Subsecretaría General de Gobierno, N° 272/495, de 12 de marzo de 2018, se aprobó la reorganización de dicho ministerio con la supuesta “finalidad de redistribuir y unificar ciertas funciones”, a través del reordenamiento de las unidades inferiores que conformaban algunas de las dependencias del Ministerio; disponiéndose la



adecuación del personal del Ministerio y de sus Seremías Regionales a lo señalado por la resolución. A su vez, mediante resolución exenta de la Subsecretaría Regional de Gobierno, N° 272/821, de 10 de mayo de 2018, se aprobó la estructura interna de las Secretarías Regionales Ministeriales del Ministerio Secretaría General de Gobierno, la que pasaría a estar compuesta por las siguientes ramas: Gabinete de la Secretaría Regional Ministerial, Unidad de Administración y Finanzas, Unidad de Gestión Regional Ministerial y Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias.

Indicó, que preocupada por esta reorganización, en cuanto a la forma en que ella repercutiría en relación con las funciones y dependencias que se daban en la práctica, remitió una serie de correos electrónicos al Ministerio Secretaría General de Gobierno y, más concretamente, al Coordinador de SEREMIS de tal Ministerio, Sr. José Moraga Lira. Dicho requerimiento de información lo efectué a petición del Jefe de Gabinete de la actual SEREMI, a efectos de interiorizarse en la reestructuración y tener herramientas para resolver adecuadamente las preguntas que se me formularan en su calidad de asesora jurídica el interior del propio SEREMI.

Expresó, que a su juicio, los actos administrativos antes señalados no corresponden sino a una desviación de fin, toda vez que éstos, si bien señalan que pretenden implementar una reorganización funcional, no son más que una manera de “justificar” los despidos por motivos políticos al interior de la administración del estado.

Indicó, que lo anterior queda de manifiesto, entre otros aspectos, en que la reestructuración no se condice con lo que ocurre en la práctica. En efecto, en virtud de la misma resultaría eliminada la Unidad de Divisiones Sociales (DOS), la que, en los hechos, continúa llamándose y funcionando como tal. Se elimina, también, la Unidad de Fondos Concursables, la que, sin embargo, en la práctica sigue llamándose y funcionando como tal. También se eliminaría la Unidad de Comunicaciones, lo que tampoco ha ocurrido en los hechos. Todos estos aspectos resultan incomprensibles pues, pese al tiempo transcurrido, las supuestas modificaciones introducidas por la referida reestructuración no han sido aplicadas en estas tres principales áreas o ámbitos de acción del Ministerio, como son la Vicería de Gobierno y la de Comunicaciones, la DOS o División de Organizaciones Sociales, y la Unidad de Fondos Concursables.

Agregó, que lo anterior es muy fácil de corroborar, dado que cualquier ciudadano puede ingresar al portal web de la SEGEGOB y encontrarse, dentro de su estructura y organización, con la Unidad de Fondos Concursables, la División de Organizaciones Sociales, la Secretaría de Comunicaciones, Unidad de Asesoría Jurídica, etc. [Http://transparencia.msgg.gob.cl/organica2.html](http://transparencia.msgg.gob.cl/organica2.html) y <http://www.msgg.gob.cl/wp/index.php/estructura-y-organizacion>).

Refirió, que así, conforme al verdadero fin orientativo de las resoluciones ya referidas, el viernes 15 de junio de 2018 fui notificada de la resolución exenta RA N° 411/86/218, de 12 de junio de 2018, a través de la cual se ponía término anticipado a su designación a contrata. La notificación la recibió de parte del propio jefe de gabinete a las 16:25 de ese día viernes, a 4 días del pago íntegro del mes (ya que se considera el período que va de 19 a 19 de cada mes). Además, en junio de 2018 le correspondía el pago de un bono por PMG (Programa de Mejoramiento de la Gestión) del año 2017, el cual, tal como se señala por la Dirección de Presupuesto del Gobierno de Chile (DIPRES), consiste



en asociar el cumplimiento de objetivos de gestión a un incentivo de carácter monetario para los funcionarios. Por tanto, al verificarse el cumplimiento de las metas del año 2017, el PMG es devengado, de modo que tenía derecho a dicho bono completo, para ser pagado en cuatro partes, en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre, en su caso recibió la primera parte el mes de marzo, como se puede constatar en la liquidación de remuneraciones respectiva con la asignación de desempeño en conjunto con bonificación compensatoria.

Destacó, que vale la pena transcribir las “razones” contenidas en la resolución que me despidió: *“Que en virtud de lo dispuesto en la Resolución Exenta N° 272/821 de fecha 10 de mayo de 2018, esta Subsecretaria se procedió a aprobar la estructura interna de las Secretarías Regionales Ministeriales del Ministerio Secretaria General de Gobierno en cada Región del país, compuesta por: El Gabinete de la Secretaria Regional Ministerial, la Unidad de Administración y Finanzas, la Unidad de Gestión Ministerial y por la oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias, suprimiéndose toda otra Unidad existente...”*. *“... la SEREMI de la Región de Valparaíso, no requiere contar con los servicios específicos de un abogado, ya que, para tales fines, todas las Seremis de este Ministerio poseen el apoyo específico de la Unidad de Asesoría Jurídica de esta Subsecretaria, por lo que, en este sentido, dona Paula Andrea Opaco Berrios ha estado ejerciendo durante todo este tiempo una duplicidad de funciones...”*.

Sostuvo, que es relevante recordar que, según la resolución No 270/166, no estaba adscrita a ninguna unidad o división particular de la SEREMI de Gobierno de la región de Valparaíso. Por el contrario, su cargo de profesional debía desarrollarse en el Ministerio Secretaria General de Gobierno, siendo asignada a la comuna y región de Valparaíso. Este punto es sumamente relevante porque, en definitiva, más allá de la reestructuración efectuada, ésta, simplemente, no le afectaba.

Manifestó, que al interior de la SEREMI varios funcionarios resultaron, al igual que ella, afectados con la decisión de poner término anticipado a su contrata, siendo objeto de idéntica decisión sus compañeros: Carola Delgado (encargada de comunicaciones), Marcela Muñoz (encargada de OIRS) y Aníbal Sánchez (encargado de fondos concursables FFOIP y FDM); todos de una misma orientación política y cuyo arribo a la administración ocurrió durante el gobierno anterior.

En cuanto al derecho y primeramente de sobre la competencia del Juzgado del Trabajo para conocer de la presente acción, indicó que si bien en su calidad de funcionaria pública regida por el Estatuto Administrativo, en principio, su relación funcionaria escapa a la competencia de los Juzgados del Trabajo, su despido, de manera evidente, obedece a que fue discriminada por su opinión política, es decir, se trató de un despido discriminatorio que atenta contra su derecho constitucional a la no discriminación, materia sobre la cual no existe, en el Estatuto Administrativo, ninguna norma ni procedimiento. Existiendo un vacío en dicha área, se hace aplicable, supletoriamente, el Código del Trabajo, tal como dispone su art. 1° al señalar que los funcionarios públicos: *“se sujetaran a las normas de este Código en los aspectos o materias no regulados en sus respectivos estatutos, siempre que ellas no fueren contrarias a estos últimos.”*

Expresó, que en consonancia con lo anterior, la posibilidad de que esta magistratura conozca de una acción como la ejercida en estos autos ha sido reconocida a nivel jurisprudencial. Así, la E. Corte Suprema ha establecido:



"Octavo: Que si bien el artículo 160 del Estatuto Administrativo, al permitir al funcionario afectado reclamar ante la Contraloría General de la Republica, ofrece una garantía para la protección de sus derechos fundamentales en la relación funcionaria, no se trata de un recurso judicial. Por importantes que sean, los recursos administrativos no ocupan el mismo lugar que los judiciales en la garantía de los derechos de las personas. Esto es algo que reconoce la propia Constitución Política, al garantizar en su artículo 38 que cualquier persona que sea lesionada en sus derechos por la Administración del Estado pueda reclamar ante los tribunales que determine la ley. No puede afirmarse que el artículo 160 del Estatuto Administrativo sea la ley que da cumplimiento a esta regla constitucional, pues él no determina un tribunal al cual reclamar. Se trata entonces de un asunto que el Estatuto Administrativo no regula. El Código del Trabajo sí lo hace. En consecuencia, de conformidad con el artículo primero del Código de Trabajo, resulta aplicable en la relación funcionaria el procedimiento de tutela laboral que establece el Código del Trabajo. (...) Noveno: Que lo anterior no importa desconocer las potestades que en este ámbito tiene la Contraloría General de la Republica. Pero estas potestades no excluyen las que por mandato constitucional y por ley corresponden a los tribunales de justicia. La exclusividad que el artículo sexto de su ley orgánica otorga a dicha Contraloría se circunscribe a la de informar, no a la de juzgar" (Corte Suprema, sentencia de Unificación de Jurisprudencia de 16 de agosto de 2016, Rol 6.417- 2016.)

Señaló, que por ende, el ejercicio de esta acción de tutela en sede laboral es completamente legítimo y jurídicamente inobjetable.

Respecto del plazo de interposición de la denuncia, señaló, que según lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 489 del Código del Trabajo, la denuncia de tutela por vulneración de derechos fundamentales con ocasión del despido debe ser interpuesta en el plazo de 60 días, contados desde la separación. En su caso, su despido se materializó el día 15 de junio de 2018, razón por la cual me encuentro dentro del plazo legal para la interposición de la presente acción.

En cuanto a la discriminación que sustenta el despido del que fue objeto indicó que la Constitución consagra el principio general del derecho a la no discriminación laboral en su art. 19 n° 16, inciso tercero, al señalar que: *"se prohíbe cualquier discriminación que no se base en la capacidad o idoneidad personal, sin perjuicio de que la ley pueda exigir la nacionalidad chilena o límites de edad para determinados casos"*. Asimismo, en su numeral 2 se establece el mismo principio, pero, esta vez, en su consideración más genérica, al establecer: *"La igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupos privilegiados... Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias"*.

Agregó, que a su turno, el artículo 2° del Código del Trabajo, en su inciso 3°, señala que: *"son contrarios a los principios de las leyes laborales los actos de discriminación"*. Se trata de una formulación genérica, que abarca toda forma de discriminación y por cualquier motivo distinto de la capacidad o idoneidad personal. Este mismo artículo, en su inciso 4°, agrega que: *"Los actos de discriminación son las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en motivos de raza, color, sexo, edad, estado civil, sindicación, religión, opinión política, nacionalidad, ascendencia nacional situación socioeconómica, idioma, creencias, participación en organizaciones gremiales, orientación sexual, identidad de género, filiación, apariencia personal, enfermedad o discapacidad u origen"*



social, que tengan por objeto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación".

Sostuvo, que de la transcripción de las disposiciones precedentes se sigue que, al amparo de nuestro ordenamiento jurídico, las personas se encuentran dotadas de un derecho constitucional en el ámbito laboral, que consiste en no ser objeto de discriminaciones arbitrarias; esto es, según señala el propio precepto del texto fundamental, cualquier discriminación que no diga relación con la idoneidad o capacidad personal.

Expresó, que tal como dice Ugarte Cataldo en su obra "Tutela de Derechos Fundamentales del trabajador", al referirse al derecho a la no discriminación: *"La interpretación del artículo 2° y 485 del Código del Trabajo debe hacerse a la luz de las normas constitucionales y particularmente del derecho de no discriminación laboral del artículo 19 número 16 de la Constitución, entendiendo la primera de esas normas como una enumeración meramente reforzativa de las normas constitucionales, pero sosteniendo que la discriminación protegida es la que, precisamente, prohíbe la Constitución –toda la que no se funde en la idoneidad o capacidad personal del trabajador"* (Ugarte Cataldo, José Luis, Tutela de derechos fundamentales del trabajador, Editorial Lexis Nexis, 2009, p. 34)

Indicó, que esta interpretación amplia del principio de no discriminación tutelado es acorde con el principio *pro homine*, en su vertiente *favor debilis*, que debe seguirse en la interpretación de toda norma relativa a los derechos fundamentales. Particularmente cuando su ejercicio se da al interior de la empresa o, en este caso, de la Administración, este parámetro hermenéutico se justifica más intensamente, toda vez que: *"...en la interpretación de situaciones que comprometen derechos en conflicto es menester considerar especialmente a la parte que, en su relación con la otra, se halla situada en inferioridad de condiciones o, dicho negativamente, no se encuentra realmente en pie de igualdad con otra"* (Aguilar Cavallo, Gonzalo, Nogueira Alcalá, Humberto, El principio favor persona en el derecho internacional y en el derecho interno como regla de interpretación y de preferencia normativa, en Revista de Derecho Público, volumen 84, primer semestre 2016, p. 16.) Es precisamente aquello lo que ocurre en la relación que existe entre la Administración del Estado y el funcionario público.

Manifestó, que pero no sólo el principio *pro homine* debe seguirse en la interpretación de toda normativa relativa a derechos fundamentales, sino que, además, al encontrarnos y reconocer la existencia de un conflicto de trabajo también en el ámbito público -en tanto Estado empleador-, resultará aplicable un criterio de interpretación que considere, particularmente, el principio protector (Se aplica este principio, en sentencia de 27 de junio de 2018, Rol 98-2018, de la Corte a de Apelación de Valdivia, que, entre los argumentos para acoger el recurso de nulidad de la denunciante, señala: *"Que, además, esta interpretación se aviene más con el principio protector del derecho laboral y en especial en la protección de garantías fundamentales que el juez tuvo por vulneradas"* (considerando tercero)) del derecho del trabajo (Picart Monsalves, Sylvia, Tutela de derechos fundamentales de los trabajadores del Estado de Chile ¿Es necesario un reconocimiento normativo expreso?, en Revista Estudios Jurídicos Democracia y Justicia, N° 3, 2014, Universidad de Talca, pp. 63 y 64).

Agregó, que en el caso de autos la denunciada me privó de su empleo después de más de dos años de buen y continuo desempeño, poniendo término



anticipado a su contrata de forma aparentemente regular, pero concretando una discriminación en virtud de su opinión y orientación política, a pesar que éstas no han afectado ni tienen la potencialidad de afectar mis capacidades e idoneidad como funcionaria pública, más aún de carácter eminentemente técnico. Esta forma de discriminación se hace aún más lesiva si consideramos que la Administración Pública, en su calidad de empleador en sentido amplio, tiene el deber de respetar y hacer respetar las ideas, creencias, convicciones de sus trabajadores, sin importar si éstas son afines o no a las suyas propias.

Refirió, que son varios los fallos que han acogido una acción de tutela de derechos fundamentales en razón de discriminación por razones políticas. Así, por ejemplo, se ha dicho que: *“El Tribunal entiende y es consciente de que en tiempos de competitividad política en orden a llegar o mantenerse en el poder, los aspirantes al poder tienden criticar abiertamente a sus contrincantes a objeto de obtener una mayor votación, pero ello no justifica en caso alguno dichos como los referidos precedentemente, de críticas a la labor funcionaria de una trabajadora que no dicen relación con su falta de capacidad o idoneidad personal, lo cual incide que este sentenciador concluya que aquellas declaraciones son claro indicio de discriminación a la denunciante exclusivamente por razones de adherencia política”*(Sentencia de 04 de abril de 2018, RIT T-16-2017. Recurrida de nulidad la misma por parte del denunciado, el recurso fue rechazado el 27 de junio de 2018, en los autos rol 98-2018, de la Corte de Apelaciones de Valdivia; encontrándose ejecutoriada la sentencia).

Indicó, que en un sentido similar, la ICA de Concepción ha sostenido: *“Que, de lo que se viene, diciendo aparece que las conclusiones a que arriba el fallo impugnado, en modo alguno se apartan de las reglas de la sana crítica, desde que al análisis de la prueba rendida por las partes se ha efectuado sin contrariar las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados, entregando la Jueza en forma clara, precisa y detallada los fundamentos y las razones jurídicas en base a las cuales la prueba rendida no logra formar la convicción para dar por acreditado que el despido de la Sra. G.B. se debió a que sus servicios no eran necesarios y no a su posición política”* (Corte de Apelaciones de Concepción, Rol 12-2015, sentencia de 02 de marzo de 2015.)

Aseveró, que su ex empleador pretendió fundar su decisión de terminación anticipada, por una parte, en la resolución N° 272/821, que aprobó una nueva estructura interna de la Secretarías Regionales Ministeriales del Ministerio Secretaria General de Gobierno de cada región; y, por otra, en una supuesta duplicidad de funciones que yo habría desplegado por más de dos años, argumentándose que la asesoría jurídica debía ser prestada por la Unidad de Asesoría Jurídica de la Subsecretaría respectiva. Sin embargo, a través de la aludida resolución la contraria sólo pretendió cubrir su arbitraria decisión de un halo de objetividad inexistente.

Manifestó, que formalmente, su cargo de “profesional” no estaba adscrito a ninguna unidad o división en particular, de manera que resulta completamente impropio asilar un fundamento de la decisión en la reestructuración de las unidades internas de la SEREMI. Pero, incluso en dicho caso, las funciones que desarrollaba como asesora jurídica eran fácilmente encasillables dentro de las nuevas unidades originadas por la supuesta reorganización, al interior del “Gabinete de SEREMI” o de la “Unidad de Gestión Regional Ministerial”.



Refirió, que por otra parte, mis labores no correspondían, en ningún caso, a una duplicidad de funciones. Desde luego, resulta completamente absurdo que, después de más de dos años de haber prestado servicios, otro profesional o alguna unidad del mismo Ministerio hubiese hecho las mismas labores. Tanto es así que, en cuanto a las funciones de la Unidad Jurídica centralizada, dependiente de la Subsecretaría a la que se hace alusión en la resolución de término de la contrata, ésta no tenía ni tiene como función la asesoría legal a las SEREMIS. Así consta en el artículo 6 del DFL 1 del Ministerio Secretaría General de Gobierno, según el cual: *“Corresponderá especialmente a la Asesoría Jurídica. a) Asesorar al Ministro y al Subsecretario en los asuntos de carácter jurídico y absolver las consultas de carácter legal que le sean formuladas por éstos o los jefes de División; b) Revisar e informar los sumarios administrativos que se instruyan por orden del Ministro o del Subsecretario, cuando éstos así lo soliciten; c) Redactar y patrocinar las denuncias, querellas o demandas civiles que el Ministro o los funcionarios del Ministerio Secretaría General de Gobierno, en su calidad de tales, deban formular ante los tribunales de Justicia; y d) Cumplir las funciones y ejercer las atribuciones que el Ministro o el Subsecretario le encomienden o deleguen”*. Como se advierte, mal podría haber estado cumpliendo una función absorbida por la Unidad de Asesoría Jurídica del Ministerio en comento.

En cuanto a la estabilidad en el empleo y principio de confianza legítima, refirió, que la E. Corte Suprema ha sostenido que: *“... el artículo 89 de la ley N° 18.834, plasma el principio según el cual, todo funcionario tienen derecho a gozar de estabilidad en el empleo, prerrogativa de la que en parte alguna se exime a quienes detentan la condición “a contrata”, sin que pueda discriminarse entre los empleados de planta y los contratas, porque el artículo 3 letra c) de dicha legislación, define el “empleo a contrata”, lo que permite concluir que la voz “empleo” que utiliza el mencionado artículo 89 es comprensiva del funcionario que se desempeña “a contrata”* (E. Corte Suprema, sentencia dictada en el marco de una apelación de recurso de protección, de 13 de julio de 2018, Rol 3711-2018.)

Manifestó, que en este orden de ideas, como funcionaria a contrata yo tenía derecho a la estabilidad en el empleo, al menos hasta que terminara el plazo por el que había sido contratada-31 de diciembre de 2018-, tal y como señala el artículo 10 del Estatuto Administrativo.

Sostuvo, que incluso más: dado que mi contrato había sido renovado sucesivamente en tres oportunidades, tenía la confianza legítima de que se renovaría al año siguiente (en cuanto mis servicios fueron prestados de manera ininterrumpida y ya se había verificado una segunda renovación o prórroga).

Señaló, que de la norma legal señalada, del tenor de su respectiva resolución de designación en el cargo, así como de cada una de las prórrogas de contratación, cada una de ellas estaba asociada, exclusivamente, a un plazo. Consecuentemente, antes de la llegada de éste último sólo podría haber sido desvinculada por alguna de las causales de cesación en el cargo de aquellas señaladas en el artículo 146 del mismo estatuto, ninguna de las cuales concurre en la especie. La causal de supresión del empleo que contempla el artículo referido, no se verifica en el caso concreto pues, como se dijo, no estamos ante una verdadera reestructuración, sino únicamente la pretensión de disfrazar una situación subjetiva de discriminación política, en una aparentemente objetiva de reordenación; la cual, por lo demás y dada mi calidad de profesional no adscrita a



ninguna unidad de aquellas que fueron suprimidas en la SEREMI de Valparaíso, mal podría haberme afectado.

Expresó, que en el Dictamen 85.700 de la Contraloría General de la República, en su parte relativa a la motivación del acto administrativo que determina la no renovación de una contrata o que pone término anticipado a la misma, se afirma que: *“El artículo 11 de la ley N° 19.880, dispone, en lo que interesa, que “Los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio”. Por su parte, el artículo 41, inciso cuarto, del mismo cuerpo legal, establece que las resoluciones finales contendrán la decisión, que será fundada. Así, los actos administrativos en que se materialice la decisión de no renovar una designación, de hacerlo por un lapso menor a un año o en un grado o estamento inferior; o la de poner término anticipado a ella, deberán contener “el razonamiento y la expresión de los hechos y fundamentos de derecho en que se sustenta”.*

Refirió, que sin embargo, no basta la sola motivación, sino que resulta, también, relevante el contenido de ésta. En este último sentido, la jurisprudencia ha sostenido: *“Que la carga de motivar la decisión contraria a la expectativa legítima de renovación de la contrata solo puede ser absuelta con motivos que no sean contrarios a derecho. Los tribunales de justicia, conociendo de la tutela laboral, pueden examinar si los motivos de la no renovación de la contrata, importan afectación de derechos fundamentales”* (E. Corte Suprema, sentencia de Unificación de Jurisprudencia de 02 de noviembre de 2016, Rol 36.491-2015.)

Señaló, que así las cosas, V.S. está plenamente facultada para analizar si el motivo invocado por la administración significó una vulneración a la garantía de no discriminación.

Expresó, que lo único que ocurrió en su caso es que cambió el Gobierno y, a partir de tal momento, no gozaba de la confianza política de las nuevas autoridades. Su cargo, sin embargo, no era de exclusiva confianza y en el sistema público sólo son cargos de exclusiva confianza aquellos que han sido definidos por la ley.

Señaló, que el hecho de que en mi resolución de contrata y en una de sus prórrogas se hubiera incluido la frase *“mientras sean necesarios sus servicios”* -cláusula no contemplada en la ley-no puede convertir el cargo en uno de exclusiva confianza, pues el artículo 49 de la Ley Orgánica de Bases de la Administración del Estado dispone que sólo la ley puede fijar los cargos de exclusiva confianza y sólo respecto de las tres más altas jerarquías de la institución.

Sostuvo, que conforme es sostenido por Picart, en nuestro actual sistema jurídico es el procedimiento de tutela de derechos fundamentales el mecanismo más apropiado para encontrar un equilibrio entre las potestad del gobierno de nombrar funcionarios de su confianza y asegurar la estabilidad en sus empleos a aquellos que no lo son. En este sentido, la autora afirma que: *“Vemos, sólo a modo de ejemplo, que cada vez que existe un cambio en el gobierno central o municipio, aumentan las desvinculaciones de funcionarios, mayormente por motivos políticos... Ello ejemplifica la necesidad de contar con un sistema que asegure una armonía entre la potestad del gobierno de nombrar funcionarios de confianza y contar con una mayor estabilidad de los funcionarios afectados. Este mecanismo eficiente es la tutela de derechos fundamentales”.*



XWLHLLXGDY

Indicó, que es así como la facultad de nombrar y remover funcionarios de exclusiva confianza, no debe extenderse artificiosamente y de manera encubierta, a aquellos que no lo son.

Respecto del procedimiento de tutela laboral, señaló, que los artículos 485 y siguientes del Código del Trabajo regulan el procedimiento de tutela laboral, por medio del cual se busca la tutela judicial efectiva de los derechos de los trabajadores cuando éstos han sido vulnerados durante la relación laboral o con ocasión del despido.

Señaló, que este procedimiento se funda en el respeto y acatamiento de las normas constitucionales en las relaciones laborales, que afecten derechos fundamentales de los trabajadores; entre ellos, el derecho a la no discriminación a que se refiere el artículo 2° del Código del Trabajo.

Manifestó, que el inciso tercero del art. 489 prescribe que, de acogerse la denuncia, el juez ordenará el pago de la indemnización a que se refiere el inciso cuarto del artículo 162 y la establecida en el art. 163, con el correspondiente recargo de conformidad al artículo 168 y, adicionalmente, a una indemnización que fijará el juez de la causa, la que no podrá ser inferior a seis meses ni superior a once meses de la última remuneración mensual.

Expresó, que esta norma, de indudable naturaleza imperativa, obliga al juez que acoja la denuncia y condene al demandado al pago de las indemnizaciones sustitutivas del aviso previo, por años de servicio con recargo legal y la indemnización adicional propia de la tutela laboral.

Indicó, que adicionalmente, el artículo 495 del Código del Trabajo prescribe que: *“La sentencia deberá contener, en su parte resolutive: 3. La indicación concreta de las medidas a que se encuentra obligado el infractor dirigidas a obtener la reparación de las consecuencias derivadas de la vulneración de derechos fundamentales, bajo el apercibimiento señalado en el inciso primero del artículo 492, incluidas las indemnizaciones que procedan”*. En este sentido y como medida concreta para obtener la reparación, procede que la denunciada pague el monto equivalente a lucro cesante, correspondiente a las remuneraciones que se habrían devengado de no haber puesto término anticipado a su contrata.

Refirió, que la procedencia del pago de lucro cesante como medida de reparación en el ámbito de la tutela de derechos fundamentales ha sido sostenida por la jurisprudencia, en los siguientes términos: *“Que esta Corte coincide con el recurrente, en cuanto sostiene que se ha cometido una infracción de ley que ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, al no condenar a la demandada al pago del lucro cesante, que en la especie se traduce en el pago de la remuneración por el periodo de vigencia de la contrata, a la que tenía derecho la demandante desde el momento en que se procedió a renovarla el 22 de noviembre de 2016, fecha en que se le generó la expectativa legítima de mantener su ingreso, y dado que se estimó su desvinculación con vulneración de garantías constitucionales, la indemnización debe ser integral, pues debe dejar a la afectada en el estado previo a la vulneración”* (Sentencia de 27 de junio de 2018, Corte de Apelaciones de Valdivia, Rol 98-2018.)

En cuanto a la prueba en el procedimiento de tutela laboral, manifestó, que el legislador estableció en el procedimiento de tutela laboral un sistema de prueba especial, atendida la particular naturaleza de las conductas que podrían dar origen a una vulneración de derechos en el ámbito de las relaciones de trabajo, o estatutarias, en el caso que nos convoca. En efecto, al trabajador o funcionario,



respectivamente, le sería muy difícil probar situaciones que, por definición, ocurren en tales ámbitos y, por tanto, en escenarios dominados por el empleador/Administración Pública.

Sostuvo, que como una forma de lograr lo anterior en el artículo 493 se contempló un supuesto de prueba indiciaria, introduciendo una reducción probatoria para el denunciante, quien sólo debe presentar indicios suficientes de la vulneración que alega. Se alivia, de esta manera, la posición de la persona vulnerada en sus derechos fundamentales, exigiéndole un principio de prueba por el cual acredite indicios de la conducta lesiva, en cuanto hechos que generen la sospecha fundada y razonable de que ha existido esta lesión.

Indicó, que este sistema de prueba indiciaria es aplicable en todas las hipótesis de vulneración, sea que ocurran durante la vigencia de la relación o con ocasión del despido.

Agregó, que en su caso, los indicios son, al menos, los siguientes: 1) El cambio de gobierno ocurrido el 11 de marzo de 2018 y la asunción del cargo de la SEREMI del Ministerio Secretaría General de Gobierno, doña Leslie Rojo Briones, persona de un partido político integrante de la coalición del nuevo gobierno y, consecuentemente, de tendencia política contraria a la del gobierno anterior y a la suya propia; 2) Su conocida tendencia política de izquierda; 3) Su calidad de ex militante del Partido PPD, así como mi abierta simpatía por los partidos de oposición al actual gobierno; 4) Su designación en el cargo durante el gobierno de la Sra. Michelle Bachelet Jeria; 5) La actitud apática y de desconfianza de la Sra. Leslie Briones hacia funcionarios designados por el gobierno anterior, en particular hacia su persona, desde el momento mismo de su entrada en funciones; 6) La circunstancia de haberme cambiado de oficina, la negativa de compartir agenda y la omisión a invitarme a reuniones de equipo una vez que entró en funciones la nueva SEREMI; 7) La negativa a otorgarme trabajo por parte del jefe de gabinete de la nueva SEREMI, y 8) Ser tildada de “roja” en una de las dos reuniones de equipos en las que participé.

Expresó, que en relación con este tema se ha sostenido que: *“La prueba indiciaria corresponde a lo que se denomina prueba indirecta o circunstancial, que se caracteriza, a diferencia de la prueba directa, en que no versa sobre el hecho principal o inmediato que se pretende probar y del que depende la decisión judicial. No hay, indica Ugarte “otra diferencia relevante entre prueba directa e indirecta que el objeto de la prueba (...). Se trata, en rigor, de lo que técnicamente se denomina principio de prueba (...) el trabajador debe aportar indicios que no prueben inmediata y directamente el hecho principal la – conducta lesiva sino que, cosa distinta, hechos o circunstancias que logren generar – en el juez laboral la sospecha razonable de que esa conducta lesiva denunciada se ha producido”* (RIT 1394-2017, de fecha 16 de abril de 2018, del Segundo Juzgado del Trabajo de Santiago).

Indicó, que en el caso de autos, los indicios referidos en este mismo apartado no pueden generar, sino una “sospecha razonable” de la vulneración a sus derechos fundamentales.

Agregó, que en esta materia y sólo a modo ejemplar, en sentencia RIT 1394-2017, de fecha 16 de abril de 2018 (Recurrida de nulidad la sentencia por la denunciada, el recurso fue rechazado con costas) del Segundo Juzgado del Trabajo de Santiago se dieron por establecidos los siguientes indicios: *“1. No se renovó a un profesional a contrata de la comuna por supuestos temas*



presupuestarios, no obstante, se contrató a personal que, si bien no fue contratada para el mismo cargo, cumplían funciones similares. 2. Existieron varias demandas en contra de la municipalidad por actos similares a los que se reclaman en este juicio”; llevando al juez a concluir que: “Ambos indicios, a criterio de este sentenciador, son de tal magnitud que sirven como prueba indiciaria o principio de prueba, por lo que la carga probatoria es de la demandada. Así, la Ilustre Municipalidad de Conchalí debió dar razones suficientes de su actuar, cuestión que, no pudo justificar”.

Expresó, que los indicios que se tuvieron por establecidos en la referida sentencia y que determinaron la condena a la I. Municipalidad, incluso son menos en número y gravedad a los que en este caso se plantean, y que no podrían sino hacer concluir la existencia de vulneración.

Finalizó solicitando, tener por tener por interpuesta denuncia de tutela laboral por vulneración de derechos fundamentales con ocasión del despido en contra de mi ex empleador Fisco de Chile, representado judicialmente por el Abogado Procurador Fiscal de la región de Valparaíso, don Michael Wilkendorf Simpfendorfer por quien lo subroga legalmente y, en definitiva, acoger la presente denuncia, declarando que con ocasión de mi despido se ha vulnerado mi derecho a la no discriminación y que, por ello, la demandada sea condenada a pagar los siguientes conceptos y cantidades: 1) \$1.897.801, como indemnización sustitutiva del aviso previo; 2) \$1.897.801, como indemnización por años de servicio; 3) \$569.340, por recargo legal del 30% sobre la indemnización por años de servicio; 4) \$20.875.811.- como indemnización especial por vulneración de derechos fundamentales con ocasión del despido; 5) \$12.335.706, por concepto de lucro cesante, correspondientes a las remuneraciones que habría percibido entre el 16 de junio al 31 de diciembre de 2018; 6) Intereses y reajustes legales; 7) Las costas de la causa. Lo anterior es sin perjuicio de la suma mayor o menor que se establezca, conforme el mérito del proceso

Que conforme, lo anterior se citó a audiencia preparatoria.

Que dentro de plazo legal comparece don **RODRIGO HERRERA CIENFUEGOS**, Abogado Procurador Fiscal (S) de Valparaíso, del Consejo de Defensa del Estado, por el Fisco de Chile, cuya representación tengo en virtud de lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley Orgánica del Consejo de Defensa del Estado, todos con domicilio para estos efectos en calle Prat N° 772, segundo piso, Valparaíso, solicitando su rechazo, con costas, a virtud de los siguientes fundamentos.

Luego de un breve resumen de la demanda, refiere que se debe hacer presente que su teoría del caso refiriendo que sin perjuicio de las excepciones que se opondrán, previo a discutir el fondo, desde ya se señala que en la especie no se ha verificado un despido vulneratorio de derechos fundamentales de la actora. En todo momento ha respetado sus derechos fundamentales, por lo que no se configura absolutamente ninguna de las hipótesis contenidas en el procedimiento de tutela laboral.

Agregó, que se niegan cada uno de los hechos en que se funda la demanda.

Refirió, que la demandante estaba sujeto a contrata, que es un empleo regulado en el Estatuto Administrativo y era la modalidad vigente al momento de su desvinculación. Además, en la última contrata de la demandante se dispuso



expresamente que su designación era hasta el 31 de diciembre del 2018 o mientras sean necesarios sus servicios.

Señaló, que la resolución administrativa que dispuso el término de la designación de la demandante detalla los antecedentes de hecho y de derecho que le sirven de sustento y conforme a los cuales se adoptó la decisión por parte del Fisco de Chile - Ministerio Secretaría General de Gobierno.

Sostuvo, que su parte rebate derechamente lo sostenido en la demanda en orden a que el término de su contrata obedece a razones de índole político, como sugiere en la demanda. Ésta se debió a que, luego de una evaluación en relación al funcionamiento de los distintos departamentos y unidades de las Secretarías Regionales Ministeriales del Ministerio Secretaría General de Gobierno, se aprobó una estructura interna nueva, reformulando los equipos de trabajo y, se dispuso el término anticipado a la designación a contrata de doña Paula Opazo Berríos en razón que las funciones que prestaba fueron absorbidas por la Unidad de Asesoría Jurídica de la Subsecretaría General de Gobierno.

Refirió, que en consecuencia, la demanda de tutela por despido vulneratorio es infundada por lo que deberá ser rechazada junto con las peticiones e indemnizaciones cuyo pago se persigue.

Seguidamente, interpuso la excepción de incompetencia absoluta del tribunal, en razón de materia, de la que se ya se resolvió por el Tribunal en la audiencia preparatoria, según consta en la acta y audio respectivo y rechazándose la mentada excepción y de la misma manera el recurso de reposición intentado por la denunciada.

Contestando derechamente la demanda, refirió, y respecto del fondo de la misma controvierte de manera formal, material, sustancial y expresamente todos y cada uno de los hechos que sirven de respaldo a la demanda como también los fundamentos de derecho en que se apoyan los referidos hechos, debiendo entenderse todos éstos como negados para los efectos del artículo 453 N° 1 del Código del Trabajo.

Señaló, que en particular, por no constarle a esta parte, se controvierte y niega: 1) Se niega la existencia de actos o conductas vulneratorias de derechos por parte de Fisco de Chile - Ministerio Secretaría General de Gobierno y sus funcionarios.; 2) Se niega la existencia de un despido conforme al Código del Trabajo. Además se niega que dicho despido sea discriminatorio o lesivo de derechos fundamentales; 3) Se niega que la actora hubiese sido objeto de un despido discriminatorio por motivos políticos; 4) Que el Fisco de Chile, deba suma alguna por indemnización por despido vulneratorio del artículo 489 del Código del Trabajo; 5) Se niega que mi parte deba pagar alguna de las indemnizaciones por término de contrata solicitadas en la demanda, como son la indemnización por años de servicio, la indemnización sustitutiva de aviso previo y el recargo del 30% de la indemnización por años de servicio; 6) Se niega que no se le hubiere pagado la suma de dinero que le corresponde por concepto de PMG de junio de 2018; y por último, 7) se niega que corresponda pagar indemnización por lucro cesante.

En cuanto a los antecedentes de la desvinculación, sostuvo, que la demandante fue contratada a contar del 01 de octubre de 2015, en calidad de Contrata, Grado 8° de la E.U.S., cumpliendo funciones hasta el 31 de diciembre de ese año.

Refirió, que teniendo la profesión de abogado, su contrata fue renovada en tres ocasiones para los años 2016, 2017 y 2018, mediante Resolución N°



411/2/2016, Resolución N° 4112/136/2016 y Resolución Exenta RA N° 411/160/2017 todas de la Subsecretaría General de Gobierno.

Agregó, que las funciones desempeñadas por la Sra. Opazo, en su calidad de abogado, consistían en asesoría jurídica de la Seremi General de Gobierno, revisión de documentos, apoyo Unidad de Fondos Concursables en lo referido a revisión de convenios y documentos jurídicos y apoyo en cuanto a los sumarios administrativos tramitados respecto de funcionarios del Servicio, etc.

Respecto de la naturaleza jurídica del empleo a contrata, manifestó, que las Resoluciones que dispusieron el nombramiento a contrata de la actora y aquella que dispuso la prórroga de su nombramiento para la anualidad 2018 se dejó expresa constancia que ello era sólo hasta el 31 de diciembre de ese año o mientras sus servicios fueran necesario.

Señaló, que en este sentido, cabe recordar que los empleos a contrata configuran una modalidad expresamente reconocida y regulada en el Estatuto Administrativo, que en su artículo 3º los define como: *“Aquél de carácter transitorio que consulta la dotación de una institución”*.

Expresó, que enseguida el artículo 10º de la citada Ley, prescribe que: *“Los empleos a contrata durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año, y los empleados que los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha, por el sólo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido propuesta la prórroga con treinta días de anticipación a los menos.”*

Indicó, que ciertamente, los empleos a contrata son de carácter precario y transitorio consultados en la dotación de un servicio, tienen una vigencia temporal que puede estar determinada por la llegada del plazo fijado que no puede exceder del 31 de diciembre de cada año o por la decisión de la autoridad de no ser necesarios los servicios del funcionario, si la designación incluyó la fórmula de contratación, *“mientras los servicios sean necesarios”*.

En cuanto a la desvinculación, realizada mediante un acto administrativo fundado, señaló, que establecida a la naturaleza transitoria de los nombramientos a contrata en la Administración del Estado, cabe señalar que el término anticipado de la designación a contrata de la demandante, formalizado mediante la Resolución Exenta RA N° 411/86/2018, notificada el 15 de junio de 2018, que se encuentra debidamente fundamentada, como se pasará a explicar:

Respecto de la motivación del acto administrativo, señaló, que en primer término, se dejó constancia que el nombramiento de la demandante fue realizado bajo la fórmula *“mientras sus servicios sean necesarios”* motivo por el cual la autoridad puede ponerle término en el momento que estime convenientes, antes del vencimiento de la anualidad respectiva.

Agregó, que en segundo lugar, se debe tener presente que las funciones fundamentales entregadas por ley a los Ministerios y Autoridades en general, es la de administrar, pero no de cualquier forma, sino de manera idónea y de acuerdo a los principio de eficiencia y eficacia, tal como reza el artículo 5º de la Ley 18.575 sobre Bases de la Administración del Estado: *“Las autoridades y funcionarios deberán velar por la eficiente e idónea administración de los medios públicos y por el debido cumplimiento de la función pública.”* Por ello, se realizó una evaluación con la finalidad de optimizar los recursos disponibles para asegurar la más idónea administración de los recursos disponibles, con base en los lineamientos de la política pública y con el eje central del bien común como fin último.



Manifestó, que luego, en esta perspectiva la decisión de poner término a la contrata se materializó en un acto administrativo fundado, en que se detallaron los antecedentes que le sirvieron de sustento a la autoridad para adoptar esta decisión, toda vez que sus servicios ya no eran requeridos, según se expresa en los considerandos del mencionado acto, que pasamos a transcribir:

"1. La Resolución Exenta N° 270/166 de 16 de octubre de 2015, que dispuso la designación a contrata en la planta de Profesionales, grado 8 de la Escala Única de Sueldos, a doña Paula Andrea Opazo Berrios, RUT N°12.721.934-6 a contar del 1 de octubre de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2015, ó mientras fueran necesarios sus servicios, para cumplir funciones como abogada de la Seremi de la V Región de Valparaíso.

2. La Resolución Exenta TRA N°411/60/2017 de 13 de diciembre de 2017, que prorroga la contrata a Paula Andrea Opazo Berrios desde el 1 de enero de 2018 y hasta el 31 de diciembre de 2018, o mientras fueran necesarios sus servicios.

3. Que, conforme lo establecen el artículos 3° letra c) y 10° de la ley N° 18.834, y los artículos 2° y 5° letra f) de la ley 18.883, los empleos a contrata poseen esencialmente un carácter transitorio, cuya duración máxima será solo hasta el 31 de diciembre de cada año, pudiendo concluir antes que expire su vigencia si la contratación cuenta con la cláusula "mientras sean necesarios sus servicios".

4. Que, en efecto, el artículo 11 de la ley N° 19.880, dispone, en lo que interesa, que "Los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio". A su vez, el artículo 41, inciso cuarto, del mismo cuerpo legal, establece que las resoluciones finales contendrán una decisión fundada.

5. Que, al tenor de lo señalado en el dictamen N° 6.400 de fecha 2 de marzo de 2018 de la Contraloría General de la República: "podrá servir de fundamento para prescindir o alterar el vínculo con un funcionario, y en la medida que se encuentre suficientemente acreditado mediante la cita de los antecedentes que respaldan esa decisión -como por ejemplo estudios o informes-, entre otros:

- La modificación de las funciones del órgano y/o su reestructuración, que hagan innecesarios los servicios del empleado o requieran que este desarrolle funciones diversas a las desempeñadas, o por un lapso inferior al año calendario...

...Sin perjuicio de lo anterior, cabe recordar que el dictamen N°48.251, de 2010, de este origen, resolvió que la aplicación de la cláusula "mientras sean necesarios sus servicios" puede estar referida a las aptitudes personales del empleado, las cuales ya no son requeridas por el servicio, sin que ello implique necesariamente que el organismo dejará de desarrollar las tareas que a aquél se le encargaban, las cuales pueden continuar siendo cumplidas por otro funcionario. No obstante, en este caso deberán expresarse las razones por las cuales los servicios del afectado dejaron de ser necesarios para el organismo."

6. Que, en virtud de lo dispuesto en la Resolución Exenta N° 272/821 de fecha 10 de mayo de 2018, de esta Subsecretaría, se procedió a aprobar la estructura interna de las Secretarías Regionales Ministeriales del Ministerio Secretaría General de Gobierno en cada Región del país, compuesta por: el Gabinete de la Secretaría Regional Ministerial, la Unidad de Administración y



XWLHLLXGDY

Finanzas, la Unidad de Gestión Ministerial y por la Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias, suprimiéndose toda otra unidad existente en las Secretarías Regionales Ministeriales distintas a las estipuladas en dicho acto administrativo, cualquiera fuese la denominación con que se les hubiere llamado.

7. Que, asimismo, independiente de los cambios realizados en las funciones y procesos existentes en las diversas Seremis de este Ministerio, los órganos de la administración del Estado por expresa aplicación de los principios de eficiencia, eficacia y economicidad, se encuentran en el imperativo de efectuar permanentemente un examen crítico y sistemático de la gestión de los organismos que dirigen, a fin de verificar el uso óptimo de sus recursos y por ello, en cumplimiento de esa prerrogativa, es dable manifestar que a la fecha, la Seremi de la Región de Valparaíso no requiere contar con los servicios específicos de un abogado, ya que para tales fines, todas las Seremis de este Ministerio poseen el apoyo específico de la Unidad de Asesoría Jurídica de esta Subsecretaría, por lo que en este sentido, doña Paula Andrea Opazo Berrios ha estado ejerciendo durante todo este tiempo una duplicidad de funciones, situación que evidentemente va en desmedro económico de esta Cartera de Gobierno y que debe ser reparada por la autoridad vigente terminando anticipadamente su contrata”.

Sostuvo, que en el caso que nos ocupa, la desvinculación de la demandante se enmarca en las atribuciones exclusivas que tiene todo jefe de servicios, que, basándose en criterios de mérito, oportunidad o conveniencia, determina la extinción del vínculo que une al funcionario con el Estado, amparado además en normas legales, artículos 3° letra c) del DFL N° 29, del 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido y sistematizado de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, que señala que los empleos a contrata son de naturaleza esporádica y transitoria, y que además, la expresión usada en el artículo 10 de dicho estatuto, esto es, que los empleos a contrata durarán como máximo solo hasta el 31 de diciembre de cada año, permite a la autoridad disponer de un período inferior, puesto que el límite está dado por el vencimiento del año calendario respectivo, lo que no obsta a que su duración fuere inferior.

Indicó, que en particular, la designación por medio de la cual se nombró a la actora, se verificó con la incorporación específica de la cláusula “mientras sean necesarios sus servicios”, cuyo fundamento legal se encuentra, por una parte, en la letra c) del artículo 3° del DFL N° 29, del 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido y sistematizado de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, ya citada y, por otra, en el inciso primero del artículo 10°, del mismo texto legal, que dispone que dichos empleos durarán, como máximo, hasta el 31 de diciembre de cada año, sin perjuicio de eventuales prórrogas y del término anticipado de las mismas por no ser necesarios los servicios, tal y como ocurre en el caso de la demandante.

Manifestó, que por otra parte, el cese de la contrata por la causa antedicha, forma parte del margen de discrecionalidad administrativa del que goza la autoridad.

Sustentó, que la transitoriedad de la contrata así como la facultad de la autoridad para poner término anticipado de la misma es una cuestión que ha sido zanjada por la Excma. Corte Suprema de nuestro país, mediante diversos fallos. A modo ejemplar, se cita la sentencia de fecha 8 de septiembre de 2014, en causa rol N° 21869-2014, caratulada “Pamela Eugenia Mohr Ferron Contra con



Secretaría Regional Ministerial de Energía Regiones Maule Bío Bío y La Araucanía”, cuyo tenor es el siguiente: “Segundo: Que de los antecedentes aparejados a la causa aparece que en lo concerniente a la duración de la designación a contrata de la parte reclamante, se incorporó la frase “mientras sean necesarios sus servicios”.

Tercero: Que la cláusula anterior está en armonía con el carácter que tienen los empleos a contrata o a honorarios. En efecto, la Ley N° 18.834 sobre Estatuto Administrativo, en su artículo 3°, luego de definir la planta del personal de un servicio público como el conjunto de cargos permanentes asignados por la ley a cada institución, al tratar los empleos a contrata señala que son aquellos de carácter transitorio que se consultan en la dotación de una institución.

Enseguida, el mismo texto legal determina en su artículo 10, en relación a la permanencia de esta última clase de cargos, que los empleos a contrata durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y quienes los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha por el solo ministerio de la ley; esto es, figura implícita la facultad de la autoridad para poner término a las funciones del empleado a contrata antes de la fecha recién indicada.

Cuarto: Que es posible considerar, entonces, que la expresión “mientras sean necesarios sus servicios” ha sido utilizada para permitir en esta clase de nombramientos la existencia de un período de vigencia que sea inferior al que le restare al empleo para finalizar el año en que los servicios recaigan.

Quinto: Que de lo que se viene de consignar se concluye que la autoridad administrativa denunciada se encuentra legalmente facultada para cesar los servicios a contrata del recurrente, servicios cuya principal característica es la precariedad en su duración, supeditada a las necesidades de la entidad empleadora, de manera que, al comunicar su decisión de dar inicio al proceso tendiente a poner término anticipado a su contrata, la recurrida sólo ha hecho uso de la facultad antes descrita.

Sexto: Que, por consiguiente, la inexistencia del comportamiento antijurídico invocado para dar fundamento al recurso conduce necesariamente a su desestimación”.

Expresó, que por su parte, en sentencia dictada el 2 de septiembre de 2014, por la Excm. Corte Suprema, en la causa rol N° 21.931-2014, se concluye que “la autoridad administrativa denunciada se encuentra legalmente facultada para cesar los servicios a contrata de los recurrentes Narváez Garrido y Sepúlveda Tagle, servicios cuya principal característica es la precariedad en su duración, supeditada a las necesidades de la entidad empleadora, de manera que, al comunicar su decisión de dar inicio al proceso tendiente a poner término anticipado a su contrata, la recurrida sólo ha hecho uso de la facultad antes descrita.”

Indicó, que con el arribo de nuevas autoridades, se efectuaron evaluaciones en relación al funcionamiento de los distintos departamentos y unidades de las Secretarías Regionales Ministeriales de Gobierno, reformulando las unidades de trabajo y determinando la eliminación de algunas de ellas y, en cuanto a las funciones que desempeñaba la denunciante, iba a ser asumida por la Subsecretaría del citado Ministerio.

Señaló, que al respecto, cabe señalar que los fundamentos se consideraron expresamente por la autoridad en el acto administrativo que pone término a la designación a contrata de la denunciante, según consta en la



resolución RA N°411/86/2018, instrumento que, por lo tanto, se basta a sí mismo, dado que contiene la totalidad de las razones consideradas para solicitar del cese de funciones. A su turno, entendemos que resulta suficientemente fundado y desprovisto de arbitrariedad a la luz de toda la legislación y jurisprudencia ya señaladas.

Argumentó, a mayor abundamiento, que en este contexto, se invocó lo establecido por la Contraloría General de la República (Dictamen N° 6.400, de 2018), en lo relativo a que la aplicación de la cláusula "mientras sean necesarios sus servicios", puede estar referida a las aptitudes personales del empleado, las cuales ya no son requeridas por el Servicio, sin que ello implique necesariamente que el organismo dejará de desarrollar las tareas que aquél se le encargaban, las cuales pueden continuar siendo cumplidas por otro funcionario.

Indicó, que entonces, podemos concluir que tal actuación en ningún caso ha sido carente de fundamento, ni mucho menos -cabe señalarlo- el alejamiento de la demandante guarda relación con aspectos políticos como los que afirma en su libelo, ajenos completamente a las instrucciones que sobre la materia ha impartido pues, por el contrario, se ha requerido a las jefaturas pertinentes, para que definan la integración y continuidad de sus equipos, basándose únicamente en aspectos objetivos, derivados de las necesidades del servicio, de la evaluación de los funcionarios, de las prioridades públicas de esta Administración, y de la disponibilidad presupuestaria.

Refirió, que en este sentido, se hace presente desde ya que la motivación política no fue en ningún caso un antecedente a considerar para el cese, por cuanto su militancia política era un hecho desconocido al momento de prescindir de sus servicios. Con este tipo de argumentación la demandante busca instrumentalizar una determinada posición política, que bajo ninguna circunstancia ha sido fundamento de la decisión de prescindir de sus servicios, sino que únicamente se produjo en consideración a los principios de eficiencia y eficacia que deben iluminar los actos de la Administración.

Manifestó, que así, se ha dado cumplimiento al principio de legalidad y atendiendo el principio de eficacia ya enunciado, que autoriza a la superioridad a adoptar las medidas de esta naturaleza respecto de cualquier servidor de su dependencia designado transitoriamente a contrata, en ejercicio de su rol directivo, para la mejor y más eficiente marcha de la institución y atendido el carácter esencialmente transitorio de la designación ya referida y que es conocida por todos los funcionarios al momento de la contratación. Por lo tanto, el comportamiento antijurídico que la recurrente pretende atribuir a este Ministerio es inexistente.

Señaló, que en cuanto a un supuesto buen desempeño en sus funciones, es preciso señalar que no es factor contemplado por el Estatuto Administrativo para asegurar la inamovilidad de un cargo. Asimismo, es evidente que ni las calificaciones ni la experiencia de los funcionarios pueden alterar la naturaleza transitoria de los empleos a contrata del sector público. En especial cuando la idoneidad profesional es aquel factor determinante respecto de las tareas a las cuales la unidad en la que se encuentra es de relevancia evidente.

Expreso, que en cuanto a la aplicación del principio de confianza legítima que la demandante dice ser favorecida, desarrollado entre otros mediante dictámenes Nos 85.700, de 2016 y 6.400, de 2018, de la Contraloría General de la República, es relevante mencionar que consiste en que *"los órganos de la*



administración del Estado deben tener una actuación coherente, y en el caso de determinar una decisión distinta a la que ha venido adoptando, dar comunicación de dicho cambio de criterio a través de un acto de carácter positivo debidamente motivado a través del cual este se manifieste”, y que se traduce en que de manera constante y reiterada un organismo de la Administración del Estado haya requerido los servicios personales de un funcionario a través de designaciones a contrata, lo que hace suponer que, salvo que medie una razón plausible, la última designación a contrata que el interesado sirvió, será renovada por toda la anualidad siguiente -ya sea por una sola designación o por varias parciales que comprendan ese año- y en iguales condiciones, generándose dicha expectativa a partir de la segunda renovación anual y en la medida que no haya interrupción entre una designación y la siguiente, por lo que la práctica que genera la confianza legítima está determinada por una extensión de tiempo que alcanza más de dos años.

Indicó, que en el caso concreto, la demandante obtuvo tres renovaciones de su contrata entre los años 2015 al 2018, teniendo la calidad de asesora jurídica, no siendo aplicable a su respecto el principio de la confianza legítima, como fundamenta su demanda, pues según explícitamente ha señalado el Órgano Contralor en Dictamen N° 6.400 de 2018, que Actualiza Instrucciones y Criterios Fijados en el Dictamen N° 8.700 de 2016: “... los citados pronunciamientos no afectan las facultades que tienen las autoridades respectivas en torno a las contrataciones -u otras figuras de designación semejantes-, en particular, en cuanto a la atribución de decidir su no renovación o el término anticipado de aquéllas en que rija la cláusula antes referida u otra similar, de conformidad con las disposiciones legales respectivas, lo que ha sido consignado de manera expresa por la jurisprudencia vigente sobre la materia, según aparece de los dictámenes Nos 12.421, 28.530 y 33.999, todos de 2017, de este origen. El mismo razonamiento es aplicable a las renovaciones dispuestas en términos diferentes, por ejemplo, rebajando el grado asimilado de la contrata o reduciendo las horas asignadas en la designación anterior.

En efecto, los aludidos pronunciamientos solo han resuelto que la decisión de no renovar o desvincular al funcionario antes del vencimiento del plazo de la designación, debe materializarse a través de un acto administrativo fundado debidamente comunicado al interesado.

En consecuencia, de forma alguna puede entenderse que los dictámenes de que se trata limitan las potestades que tienen las superioridades para incorporar al organismo funcionarios a contrata -o bajo otra figura de designación semejante-, determinar su grado remuneratorio y, en general, ejercer todas las facultades que les otorga el ordenamiento jurídico respecto del personal de su dependencia”.

Agregó, que en conclusión, este Órgano del Estado ha tenido una actuación coherente, pues la desvinculación de la actora se encuentra debidamente fundamentada en razones de hecho y de derecho.

Sostuvo la inexistencia indicios en la demanda y a su vez de actos que afecten los derechos de la demandante al respecto manifestó, que de acuerdo con el artículo 493 del Código del Trabajo, cuando de los antecedentes aportados por la parte denunciante resulten indicios suficientes de que se ha producido la vulneración de derechos fundamentales, recién deberá el denunciado explicar los fundamentos de las medidas y de su proporcionalidad. Pues bien, en el texto de la



demanda de tutela presentado por la demandante no aparecen enunciados indicios algunos que permitan determinar un término anticipado de su contrata que haya lesionado su derecho a la no discriminación, menos aún motivada por su opción política (desconocida para mi parte), lo que hace improcedente su accionar.

Hizo presente, que el mero hecho de haber militado (como reconoce la propia actora) en un partido político o que se le haya puesto término anticipado a su contrata, en la forma concreta y expresa indicada en la resolución que le puso término, no pueden ser consideradas como indicios de una discriminación política en su contra que motiva la decisión de desvinculación.

Manifestó, que de acuerdo con el artículo 485, inciso 3º, del Código del Trabajo: *“Se entenderá que los derechos y garantías a que se refieren los incisos anteriores resultan lesionados cuando el ejercicio de las facultades que la ley le reconoce al empleador limita el pleno ejercicio de aquellas sin justificación suficientes, en forma arbitraria o desproporcionada, o sin respeto a su contenido esencial”*. Agregando el 489, que si la vulneración de derechos fundamentales, se hubiere producido con ocasión del despido, el trabajador afectado es el único legitimado para reclamar.

Sustentó, que como se ha venido diciendo, en la decisión de terminar anticipadamente la designación a contrata de la demandante mediante una acto administrativo fundado no existe vulneración ni afectación alguna a los derechos cuyo ejercicio garantiza la Constitución Política de la República, esto porque en la decisión de cesar en forma anticipada su contratación, se dictó con plena sujeción a la normativa legal vigente y aplicable a la materia.

Expresó, que no existen indicios suficientes que demuestren que el cese de funciones de la actora es producto de actos discriminatorios ni que afecten su derechos y garantías constitucionales, pues ninguno de los antecedentes que se citan como indiciarios de vulneración de derechos – que dicen relación con aspectos políticos tienen la suficiencia para configurar un despido lesivo de derechos, como se sugiere en la demanda.

Indicó, que en cuanto a la afectación del derecho a no discriminación, la actora fundamenta la terminación anticipada de su contrata en uno de los factores indicados en el artículo 2 del Código del Trabajo, esto, es opinión política, por que las nuevas autoridades la discriminaron por haber militado de un Partido Político opositor y por ser conocida su opinión política.

Señaló, que al efecto es necesario señalar que en ninguna de las Resoluciones que dispusieron la contratación de la actora se condicionó su ingreso al servicio a la afiliación a un determinado partido político. No existe en el Ministerio demandado una diferenciación de personas por filiación política, la actual autoridad desconocía al momento de su desvinculación este antecedente del ex funcionario del Servicio, el que, en definitiva, resulta totalmente intrascendente.

Argumentó, a mayor abundamiento, que de otro lado, como se ha explicado la desvinculación de la interesada fue producto de un proceso racional en la cual se tuvieron en cuenta las necesidades del servicio en relación a sus aptitudes de idoneidad y experiencia para el desempeño de las tareas de la SEREMI en que se desempeñaba, motivaciones que se plasmaron en la resolución dictada al efecto, haciendo inverosímil una discriminación en razón de su afiliación política. Debe además recalcar que las funciones ejercidas por la denunciante antes de su



desvinculación han sido absorbidas por la Subsecretaría del Ministerio General de Gobierno.

Respecto de las prestaciones económicas y no económicas reclamadas, indicó, que sin perjuicio de lo anterior que es suficiente para rechazar la demanda, la actora pide se condene el pago de prestaciones económicas propias de una relación laboral.

Refirió, que sin duda alguna, ninguna de las prestaciones solicitadas es procedente, como se ha explicado latamente; por no existir ningún acto de vulneración de derechos fundamentales y tampoco relación laboral entre las partes, por lo que se hace absolutamente impertinente cualquier prestación económica derivada de la acción de tutela.

Manifestó, que con todo, a continuación desarrolla en forma más detallada los motivos para desestimar las indemnizaciones que se reclaman en auto.

Sostuvo la improcedencia de la indemnización sancionatoria del art. 489 del código del trabajo, al no existir norma alguna en el Estatuto Administrativo que contenga alguna remisión al Código del Trabajo, que haga aplicable los artículos 485 y siguientes sobre tutela laboral, consideramos que la indemnización sancionatoria equivalente a once sueldos del artículo 489 del Código del Trabajo no son compatibles con el régimen estatutario al que están sujetos los funcionarios públicos, razón por la que no procede que se le reconozcan a la denunciante.

Señaló, que por lo demás esta indemnización es totalmente improcedente por cuanto según lo latamente reseñado en este escrito no ha existido un despido ni menos aún un despido lesivo de los derechos de la actora, sumado a que los hechos denunciados no revisten ninguna gravedad que obligue al Juez a fijar una indemnización según esta disposición.

Expreso, que por último y en subsidio de lo expuesto en este numeral, esta parte viene en señalar que aún en el caso que SS. acogiera la acción de tutela accionada o que declarara como una infracción grave y discriminatoria la terminación anticipada de la contrata de la demandante, los montos de las indemnizaciones pedida de 11 remuneraciones son desproporcionadas al período trabajado, entendiendo tal como de dos renovaciones anuales de la funcionaria pública demandante, por lo que deberá ponderarse en su mérito la aplicación de la indemnización entre 6 meses a 11 meses de remuneración, la que esta parte solicita sea en el mínimo legalmente permitido.

Sustentó, la improcedencia del lucro cesante, indicando que la demandante solicita una indemnización compensatoria o por lucro cesante por término anticipado de su contrata, por las remuneraciones a que habría tenido derecho hasta el 31 de diciembre del 2018.

Agregó, que ciertamente esta indemnización es absolutamente improcedente, ya que la actora no obstante haber demandado en sede laboral pretende una indemnización por remuneraciones futuras o lucro cesante no contemplada en la ley laboral, pues vendría a indemnizar todas las remuneraciones que no percibiría producto de la terminación de su relación funcionaria, por lo que no se trata de una indemnización laboral sino que de una indemnización civil.

Manifestó, que sin perjuicio de ello, aun de admitirse la procedencia de una indemnización por lucro cesante en materia laboral, ella tendría su fundamento en el incumplimiento en que incurre el empleador al efectuar un despido antes del plazo convenido, sin invocar causal legal como asimismo, sin cumplir con las



formalidades y requisitos legales, lo que no cabe sino calificar como despido injustificado.

Hizo presente, que en otras palabras, en tal caso, el empleador se habría colocado libremente en la situación de no otorgar el trabajo convenido y no pagar las correspondientes remuneraciones hasta el vencimiento del plazo del contrato, por ello no puede ser calificado como un contratante diligente en la ejecución de sus obligaciones.

Manifestó, que nada de lo expuesto se aplica al caso de marras. Ya se ha señalado, latamente que la designación de la demandante era transitoria, realizada bajo la fórmula mientras sus servicios sean necesarios para la institución, sumado a que, sin perjuicio de ello, es improcedente demandar el lucro cesante en esta sede por tratarse de una cuestión civil, derivada del supuesto incumplimiento de un contrato conforme al art. 1556 del Código Civil.

Abogó, por la improcedencia de la indemnización por indemnización sustitutiva del aviso previo, años de servicio y recargo legal, expresando que las pretensiones solicitadas por la demandante son de naturaleza indemnizatoria y es del caso que ninguna de estas prestaciones puede ser concedida a la demandante dada la naturaleza jurídica de su vinculación con el Estado, la que en ningún caso es capaz de generar el cobro de las sumas de dinero, por cuanto, además de no existir servicios bajo vínculo de subordinación y dependencia, tampoco existió un despido ni menos vulneratorio a sus derechos fundamentales.

Sostuvo la improcedencia de pago de un bono por cumplimiento de metas de gestión, indicando que la demandante solicita un pago proporcional del bono de cumplimiento de metas de gestión al tiempo trabajado del mes de junio de 2018, indicando que la ausencia de pago constituiría una vulneración de las garantías constitucionales.

Señaló, que sin embargo, sí se le pagó del referido bono correspondiente a los 17 días de junio trabajados, conforme a las exigencias legales que deben cumplirse según la Ley 19.490, que corresponde al Programa de Mejoramiento de la Gestión del Servicio el pago del bono.

Expresó, que en consecuencia, su pretensión es improcedente por habersele efectivamente pagado lo que le correspondía respecto de este ítem.

Respecto de los reajustes e intereses, manifestó, que en cuanto a la petición que las pretensiones económicas demandadas sean pagadas con reajustes e intereses legales, se solicita que en el evento que S.S. estime procedente acceder a alguna de ellas, por acreditarse las circunstancias de hecho y de derecho que las hacen procedente las sumas que se ordene pagar, limitadas a los montos que de conformidad al mérito de autos y en derecho corresponda, lo sean sólo a contar de la fecha en que dicha sentencia quede firme y ejecutoriada. Sin embargo, esta petición es indeterminada, por lo que se debe proceder a su rechazo.

Manifestó, que mientras no exista una sentencia ejecutoriada que disponga el pago, ninguna obligación tiene este demandado de indemnizar y, por tanto, ninguna suma existe que deba generar aumentos, intereses o reajustes.

En cuanto a las costas, indicó, que en todo caso, en el evento que se resuelva que este compareciente es vencido total o parcialmente, se solicita se le exima del pago de las costas de la causa, por estimar que tuvo motivo plausible para litigar, conforme a los argumentos esgrimidos en esta defensa.



Finalmente, solicitó atendido el mérito de lo expuesto, solicitó tener por contestada la demanda de autos, en los términos precedentemente expuestos y, en su oportunidad, acoger la excepción de incompetencia del tribunal o, en subsidio rechazar la demanda deducida en estos autos en todas sus partes, con costas.

SEGUNDO: Audiencia Preparatoria. Comparecencia de las partes, traslado de excepción y llamado a conciliación. Las partes comparecieron al juicio a la audiencia preparatoria y el Tribunal dispuso, según consta en el acta de audiencia preparatoria el y conforme lo dispone el artículo 453 N° 1 inciso tercero se resolvió cuya resolución es del siguiente tenor: *“Atendido el mérito de los antecedentes, estimándose por este Juez, que, de conformidad al artículo 1° inciso 3° del Código del Trabajo, las normas sobre tutela de derechos fundamentales, ocurrida en relación a los funcionarios públicos, independiente de la calidad de titulares o contrata, son de conocimiento del Juzgado del Trabajo, en tanto no exista un procedimiento, un Tribunal, un órgano establecido en las normas o estatutos especiales que los rigen, en la especie el estatuto administrativo, que contenga disposiciones acerca de esta materia, considerando, además que la regulación contenida en el Código del Trabajo, no resulta ser en modo alguno contradictoria a las normas y principios que conforman el estatuto administrativo, deberá necesariamente, rechazarse la excepción de incompetencia planteada por la demandada, sin costas, por estimarse que, este Juzgado de Letras del Trabajo es plenamente competente de la materia.”* Resolución que fue recurrida por el abogado del Consejo de Defensa del Estado, que representa a la parte denunciada deduciendo reposición en contra de la resolución que rechazó la excepción de incompetencia, rechazándose por el Tribunal el mentado recurso.

Además, se dejó constancia en el audio que el derecho fundamental que reclama vulnerado la denunciante es el de la no discriminación.

Que se llamó a las partes a conciliación y esta fracasó y no se fijaron hechos pacíficos.

TERCERO: Audiencia Preparatoria. Hechos a probar. Se fijaron en la audiencia preparatoria como hechos a probar los siguientes:

- 1) Naturaleza de la relación que la demandante mantiene con el Ministerio Secretaría General de Gobierno, régimen jurídico que le es aplicable, funciones desempeñadas por la actora y circunstancias del término de su contrato;
- 2) Indicios de haber sido, la denunciante, vulnerada en sus derechos fundamentales, en específico su derecho a no ser discriminada en razón de actos o conductas realizados por la denunciada Secretaría General de Gobierno. Antecedentes que lo acrediten; y
- 3) Efectividad de haber sufrido la denunciante perjuicios patrimoniales y si el mismo se originó por actos u omisiones de la demandada, entidad y monto del daño respectivo. Antecedentes de que lo acrediten.



CUARTO: Audiencia de juicio. Prueba del actor. La parte denunciante con la finalidad de acreditar sus dichos ofreció en la audiencia preparatoria e incorporó en la audiencia de juicio, la siguiente prueba.

A.- Documental, consistente en:

- 1) Copia de Resolución 270/166 de 16 de octubre de 2015, mediante la cual se contrata a la actora en el Ministerio Secretaría General de Gobierno, en el que se dice que: *"CONTRATA A PERSONA QUE SE INDIVIDUALIZA. (...) RESOLUCIÓN N° 270/166 (...) SANTIAGO. 16 OCT. 2015 (...) VISTO: (...) Lo dispuesto en los artículos 9, 10, 12, 13 y 14 del DFL N° 29. de 2004. del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo; el DFL N° 17, de 1990, y sus posteriores modificaciones, del Ministerio Secretaría General de Gobierno; la Ley N° 19.032; la Ley N° 20.798, de 2014, que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el año 2015, y la Resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República. (...) CONSIDERANDO (...) 1.-Que, se cuenta con fondos en el Subtítulo 21, Gastos en Personal, del Presupuesto año 2015 para este Ministerio (...) 2.- Que, existe disponibilidad en la dotación asignada para este Ministerio en el Presupuesto 2015, Glosa 02 letra a), que establece una dotación máxima de 418 funcionarios. (...) RESUELVO:(...) 1.- CONTRÁTESE en el Ministerio Secretaría General de Gobierno, desde el 01 de octubre de 2015 al 31 de diciembre de 2015, mientras sus servicios sean necesarios, a la persona que se individualiza, en el cargo y grado que se señala: (...) NOMBRE PAULA ANDREA OPAZO BERRIOS (...) RUT12.721.934-6 (...) CARGO Profesional (...) GRADO8 E.U.S. (...) DESEMPEÑO Valparaíso, Región de Valparaíso (...) Por razones Impostergables de buen servicio, la persona mencionada asume sus funciones en la fecha señalada, de conformidad con el artículo 16° del Estatuto Administrativo, sin esperar la total tramitación de esta resolución. (...) 2.- IMPÚTESE el gasto correspondiente con cargo al Ítem: 21-02-001. TÓMESE RAZÓN, REGÍSTRESE Y COMUNIQUESE."*
- 2) Copia de tres resoluciones de prórrogas de contratación, de fechas 27 de noviembre de 2015, 30 de noviembre de 2016 y 30 de noviembre de 2017, en las que se refiere que: *"Santiago; 27 de noviembre de 2015 (...) D. PAULA ANDREA OPAZO BERRIOS PRESENTE (...) El Ministerio Secretaria General de Gobierno, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 10° del D.F.L N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, viene en informar a Ud., la prórroga de la contratación que mantiene con este Ministerio, a contar del 01 de enero de 2016 y hasta el 31 de diciembre de 2016, ambas fechas inclusive, mientras sean necesarios sus servicios. (...) Saluda atentamente a Ud., (...) Leslie Faure Bastias (...) Jefe Departamento de RR.HH."*; *"Santiago; 30 de noviembre de 2016 (...) Doña PAULA ANDREA*



XWLHLLXGDY

OPAZO BERRIOS PRESENTE (...) El Ministerio Secretaría General de Gobierno, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 10° del D.F.L N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, viene en informar a Ud., la prórroga de la contratación que mantiene con este Ministerio, a contar del 01 de enero de 2017 y hasta el 31 de diciembre de 2017, ambas fechas inclusive. (...) Saluda atentamente a Ud., (...) CONRADO LEIVA GUTIÉRREZ Jefe Departamento de Recursos Humanos Ministerio Secretaría General de Gobierno.” y “Santiago; 30 de noviembre de 2017 (...) D. PAULA ANDREA OPAZO BERRIOS PRESENTE (...) El Ministerio Secretaría General de Gobierno, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 10° del D.F.L N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, viene en informar a Ud., la prórroga de la contratación que mantiene con este Ministerio, a contar del 01 de enero de 2018 y hasta el 31 de diciembre de 2018, ambas fechas inclusive. (...) Saluda atentamente a Ud., (...) CONRADO LEIVA GUTIÉRREZ Jefe Departamento de Recursos Humanos Ministerio Secretaría General de Gobierno”;

- 3) Copia de resolución exenta de la Subsecretaría General de Gobierno, N° 272/495, de 12 de marzo de 2018, en la que se indica que: *“APRUEBA REORGANIZACIÓN MINISTERIAL CORRESPONDIENTE A LAS DEPENDENCIAS QUE INDICA. (...) RESOLUCIÓN EXENTA N° 272/495 (...) SANTIAGO, 12 de marzo de 2018 (...) VISTOS; (...) Lo dispuesto en del DFL 1 de la ley N° 19 032 del Ministerio Secretaría General de Gobierno, de 1992 que Modifica la Organización del Ministerio Secretaría General de Gobierno lo dispuesto en la Ley 18 575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración de) Estado cuyo texto fue refundido, coordinado y sistematizado por el DFL N° 1/19 653, de 2000. del Ministerio Secretearla Genera! de la Presidencia; lo dispuesto en la ley N° 19 880 que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado y en la resolución N° 1 600 del año 2008 de la Contraloría General de la República (...) CONSIDERANDO: (...) 1.- Que, el artículo 24 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, señala que a los Subsecretarios les corresponderá coordinar la acción de los órganos y servicios públicos del sector, actuar como ministros de fe, ejercer la administración interna del Ministerio y cumplir las demás funciones que les señale la ley (...) 2.-Que de acuerdo a lo dispuesto en el D F L N° 1, de 1992, pre citado corresponde al Ministerio Secretarla General de Gobierno a través de su División de Organizaciones Sociales y División Secretaría de Comunicaciones entre otros contribuir a hacer más eficientes los mecanismos de vinculación, interlocución comunicación entre el gobierno y las organizaciones sociales favoreciendo el asociacionismo y el*



fortalecimiento de la sociedad civil promover la participación de la ciudadanía en la gestión de las políticas públicas y servir de órgano de informaciones del Gobierno proporcionando el material correspondiente a los medios de comunicación nacionales e internacionales, ^difundiendo sus planes, orientaciones políticas y obras realizadas a través de programas especiales de comunicación (...) 3.- Que en atención a la dispersión de atribuciones en diversas unidades las cuales podrían ser ejecutadas de manera más ágil y eficiente evitando la duplicidad de funciones y el mal uso de recursos resulta imperativo reorganizar algunas dependencias de esta Secretaría de Estado con la finalidad de redistribuir y unificar ciertas funciones (...)4.- Que en este sentido y por razones de buen servicio, con el objeto de lograr una mayor eficiencia y eficacia en la gestión institucional junto con mejorar la utilización de recursos tanto financieros como humanos se hace necesaria la adecuación de algunos aspectos de la estructura organizacional interna de este Ministerio especialmente en lo referente a las dependencias que lo conforman (...) 5.- Que. en este orden de ideas, no existe motivo o razón suficiente que justifique mantener esta situación en statu quo con el respectivo menoscabo económico que ello significa para el ejercicio de las funciones encomendadas a esta Cartera de Estado por lo que con el propósito de mejorar la atención de las necesidades públicas que este órgano está llamado a satisfacer resultó imperativo efectuar una reestructuración interna que no implica la modificación de las Unidades baseas contenidas en la ley respectiva sino más bien un reordenamiento de las unidades inferiores que conforman algunas de las dependencias de esta Cartera de Estado (...) 6.- Que, en virtud del artículo 2º de la ley 19 032. que reorganiza el Ministerio Secretaria General de Gobierno "las secretaras Regionales Ministeriales ejecutarán, en su ámbito jurisdiccional las funciones propias de la cartera", las que en atención una mayor eficiencia y coordinación con el Ministerio Secretaria General de Gobierno, han sido, en sus unidades inferiores también reestructuradas (...)RESUELVO: (...) 1º.- Apruébese la reorganización de la las siguientes dependencias de este Ministerio y en lo concerniente de las respectivas Secretarías Regionales de Gobierno en los términos que pasan a exponerse a continuación (...) I) DIVISIÓN DE ORGANIZACIONES SOCIALES (...) La División de Organizaciones Sociales (DOS), es un canal de comunicación entre el Gobierno y la sociedad civil, y colabora activamente en el fortalecimiento de ésta por lo que busca a través de distintas herramientas informar o dar espacios de opinión para que toda la comunidad participe Dentro de los objetivos de la División esta contribuir a la mayor eficiencia de los mecanismos de vinculación interlocución y comunicación entre el Gobierno y las organizaciones sociales También promover la participación de la ciudadanía en la gestión de las políticas públicas y establecer los mecanismos de coordinación pertinentes para las cuentas públicas anuales sobre participación



ciudadana de acuerdo a la ley 19 032 Para el cumplimiento de dichos fines, esta división se encuentra conformada por 3 departamentos los que a su vez, se estructuran en diversas unidades a saber (...) a) Departamento do Estudios, Territorio y Comunicaciones: (...) b) Departamento de Formación y Participación Ciudadana: c) Departamento de Coordinación Administrativa (...) ii) DIVISIÓN SECRETARÍA DE COMUNICACIONES. (...) A la División Secretaria de Comunicaciones le corresponde servir de órgano de informaciones del Gobierno, proporcionando el material correspondiente a los medios de comunicación nacional e internacional difundiendo sus planes orientaciones políticas y obras realizadas a través de programas especiales de comunicación También provee a las autoridades la información actualizada del acontecer nacional e internacional así como de análisis de otras materias relativas a la comunicación Asimismo, identifica las necesidades globales y específicas de comunicación de las diferentes instancias gubernamentales y propone a éstas las estrategias adecuadas proporcionando la asesoría necesaria para satisfacerlas en virtud de lo cual desarrollara los estudios e investigaciones pertinentes, para ello se encuentra conformada por 5 departamentos los que a su vez se estructuran en diversas unidades a saber: (...) a) Departamento de coordinación administrativa; b) Departamento de comunicaciones; c) Departamento digital, de diseño y audiovisual (...) d) Departamento de estudios (...) e) Departamento de marketing: (...) 2°. Modifícase la resolución exenta N°272/1755 de 2013 que crea el Observatorio de Participación Ciudadana y No Discriminación en el sentido de agregar una cuarta función incorporando a su dependencia el Área de Diversidad e Inclusión Social, (...) antes dependiente de Ja Subdirección de la División de Organizaciones Sociales (...) 3°.- Adecúese el personal de este Ministerio y de sus respectivas Seremias Regionales en virtud de lo establecido precedentemente por la presente resolución”. Departamentos;

- 4) Copia de resolución exenta de la Subsecretaría Regional de Gobierno, N° 272/821, de 10 de mayo de 2018, en la que se refiere que: “APRUEBA ESTRUCTURA INTERNA DE LAS SECRETARIAS REGIONALES MINISTERIALES DEL MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO. (...) RESOLUCIÓN EXENTA N°272/821 (...) SANTIAGO, 10 MAYO 2018 (...) VISTOS: (...) Lo dispuesto en el artículo N° 5 del DFL N° 1/19.653 publicado en el D.O. el 17/11/01 por el cual se fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; el artículo 3° de la ley N° 19.032, de 1991, que reorganiza el Ministerio Secretaria General de Gobierno; los artículos 1° y 2° del DFL N° 1 publicado en el D.O. el 12 de febrero de 1992, ley N° 19.175 Orgánica Constitucional sobre Gobierno Regional y sus modificaciones posteriores; la Resolución Exenta 272/495, de fecha 12 de marzo de 2018; y la resolución N° 1600 de 2008, de la Contraloría General de



la República: (...) CONSIDERANDO: (...) a) Que, el artículo 24° de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, señala que a los Subsecretarios les corresponderá coordinar la acción de los órganos y servicios públicos del sector, actuar como ministros de fe, ejercer la administración interna del Ministerio y cumplir las demás funciones que les señale la ley; b) Que, según lo establecido en el artículo 23° de la ley N° 18.575, los Ministerios se desconcentrarán territorialmente mediante las Secretarías Regionales Ministeriales, las que estarán a cargo de un Secretario Regional Ministerial, quien representará al Ministerio en la respectiva Región; c) Que, en el artículo 1° del DFL N° 1, de fecha 12 de febrero de 1992, se establece que el Ministerio Secretaría General de Gobierno estará integrado por el Ministro, la Subsecretaría y las Secretarías Regionales Ministeriales; d) Que, a continuación, en el artículo 2° del mismo DFL N° 1 del 12 de febrero de 1992, se dispuso que, con la sola excepción de la Región Metropolitana, existirá en cada Región del país una Secretaria Regional Ministerial, la que además de servir de organismo asesor del respectivo Intendente, ejecutará en su ámbito jurisdiccional, las funciones propias de la cartera; e) Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 63° de la ley N° 19.175, a las Secretarías Regionales Ministeriales les corresponderá, entre otras; elaborar y ejecutar las políticas, planes y proyectos regionales, estudiar, conjuntamente con los organismos correspondientes, los planes de desarrollo sectoriales; preparar el anteproyecto de presupuesto regional en la esfera de su competencia, informar permanentemente al Gobierno Regional del cumplimiento del programa de trabajo del respectivo sector; llevar a cabo las tareas que sean propias de su respectivo Ministerio, de acuerdo con las instrucciones del ministro del ramo; realizar tareas de coordinación, supervigilancia o fiscalización sobre todos los organismos de la administración del Estado que integren su respectivo sector; cumplir las demás funciones que contemplen las leyes y reglamentos, y ejercer las atribuciones que se les deleguen por los ministros respectivos; f) Que, mediante la Resolución Exenta N° 272/495, de fecha 12 de marzo de 2018, se aprobó la reorganización Ministerial de la unidades inferiores dependiente de esta Cartera de Estado y de la Secretarías Regionales Ministeriales; g) Que, en virtud de la Resolución Exenta antes individualizada y con el objeto de cumplir con las obligaciones indicadas en la letra e) del presente acto administrativo, fue necesario crear una estructura que sirviera al propósito señalado y establecer sus funciones de manera de propender a una más eficiente y eficaz gestión de esta Secretaría de Estado. (...) RESUELVO: (...) 1.- Apruébese la estructura interna de las Secretarías Regionales Ministeriales del Ministerio Secretaría General de Gobierno en cada Región del país, compuesta por: el Gabinete de la Secretaria Regional Ministerial, la Unidad de Administración y Finanzas, la Unidad de Gestión Regional Ministerial y por la Oficina de Informaciones,



XWLHLLXGDY

Reclamos y Sugerencias, según se ilustra en organigrama adjunto y cuyas funciones se pasan a describir; 2.- El Gabinete es la Unidad Asesora del Secretario Regional Ministerial y cuenta con un Jefe de Gabinete y un equipo de profesionales de apoyo, quienes están a cargo de la planificación, programación de la agenda de trabajo del Seremi, así también de la coordinación con las entidades o personas participantes; del recibimiento de las autoridades, representantes de organizaciones, funcionarios y otras personas que tengan audiencia; y en general, de la realización de los demás cometidos que le asigne el respectivo Seremi; 3.- A la Unidad de Administración y Finanzas le corresponde ejecutar la función de apoyo administrativo al Seremi; coordinación con la División de Administración y Finanzas del Ministerio; gestión de acuerdo a la normativa vigente las adquisiciones de la Seremi; administración del personal y control del cumplimiento de las disposiciones legales atinentes a la carrera funcionaria, entre otras materias; 4.- La Unidad de Gestión Regional Ministerial está a cargo de la coordinación de organizaciones sociales, mediante la promoción de la participación de la ciudadanía en la gestión de las políticas públicas y, además, se encarga de la difusión e información de los planes y orientaciones del Gobierno; 5.- La Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias es la encargada de facilitar el acceso de los solicitantes a la información sobre el funcionamiento de la Secretaría Regional Ministerial de Gobierno y de recibir y gestionar todas los requerimientos ciudadanos, con el propósito de mejorar la gestión y funcionamiento de las instituciones y así constituir en un espacio de participación; 6.- Suprímase, toda otra unidad que exista actualmente en las Secretarías Regionales Ministeriales distintas a las estipuladas en el presente acto administrativo, cualquiera sea la denominación con que se les hubiere llamado, debiendo, en lo sucesivo, aplicarse únicamente la estructura que se señala en esta resolución (...) COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y ARCHIVESE (...) Emando Hantelmann Godoy (...) Subsecretario General de Gobierno” Aprueba estructura de seremias y como está compuesta;

- 5) Copia de hoja de calificación de la actora, del período septiembre de 2016 a agosto de 2017, en la que se indica como puntaje final 100, 00 y Lista de calificación 1;
- 6) Certificados de remuneraciones de la actora, de los años 2015 a 2017, en los que se destacan por el abogad de la denunciante los montos brutos mensuales y anuales percibidos por la actora, y respecto de estos últimos se indica para el año 2015 en el que se trabajó los meses de octubre hasta diciembre fue de \$6.240.739; para el año 2016 en el que se pagó por la totalidad de los meses (enero - diciembre) un total bruto de \$26.078.862; y finamente para el año 2017, por los doce meses trabajados (enero - diciembre) I cantidad de \$27.866.329;

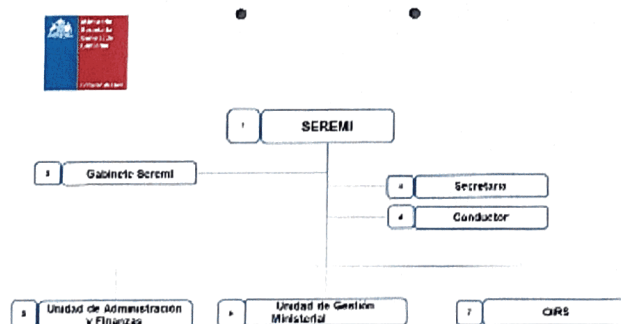


- 7) Liquidaciones de remuneraciones de la actora, del año 2017, en la que se indican los estipendios que la componen y el total haberes y líquido a pagar, es así como los montos en cada mes son los siguientes: enero, total haberes \$1.904.540, líquido a pagar \$1.517.055; febrero, total haberes \$1.829.338, líquido a pagar \$1.441.336; marzo, total haberes \$3.329.099, líquido a pagar \$2.764.560; abril, total haberes \$1.829.338, líquido a pagar \$1.441.080; mayo, total haberes \$1.829.338, líquido a pagar \$1.442.582; junio, total haberes \$3.339.578, líquido a pagar \$2.771.952; julio, total haberes \$1.829.338, líquido a pagar \$1.442.988; agosto, total haberes \$1.829.338, líquido a pagar \$1.442.630; septiembre, total haberes \$3.387.018, líquido a pagar \$2.817.830; octubre, total haberes \$1.655.306, líquido a pagar \$1.297.911; noviembre, total haberes \$1.839.228, líquido a pagar \$1.450.232; y diciembre, total haberes \$3.549.941, líquido a pagar \$2.832.323 , concordante con el anterior;
- 8) Liquidaciones de remuneraciones de la actora, de enero a mayo de 2018, en la que se indican los estipendios que la componen y el total haberes y líquido a pagar, es así como los montos en cada mes son los siguientes: enero, total haberes \$1.962.290, líquido a pagar \$1.5553.817; febrero, total haberes \$1.885.208, líquido a pagar \$1.476.311; marzo, total haberes \$3.449.053, líquido a pagar \$2.845.248; abril, total haberes \$1.919.263, líquido a pagar \$1.510.361; y mayo, total haberes \$1.696.688, líquido a pagar \$1.319.799, concordante con el anterior;
- 9) Copia de certificado de Magíster en Derecho, con mención en Derecho Público, correspondiente a la actora y otorgado por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, con fecha 28 de febrero de 2017;
- 10) Copia de certificado de aprobación de Diplomado en Derecho Administrativo, correspondiente a la actora y otorgado por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, con fecha 18 de abril de 2018;
- 11) Copia de certificado de postítulo en Asesoría Jurídica de la Empresa, correspondiente a la actora y otorgado por la Universidad del Desarrollo, con fecha 12 de agosto de 2008;
- 12) Copia de mensaje de correo electrónico remitido por la actora a la Seremi de Gobierno de Valparaíso, doña Leslie Briones Rojo, de fecha 23 de mayo de 2018, en la que se lee que: *"Solicita instrucción (...) Paula Opazo Berrios (...)mié 23-05-2018 12:27 (...) Paraieslie Briones Rojo <leslie.briones@msgg.gob.d> (...) CcJorge Saavedra Peña <jorge.saavedra@msgg.gob.cl>; (...) Estimada Seremi, (...) Junto con saludar solicito a Ud. pronunciamiento acerca de lo siguiente., la semana pasada sólo por pasillo me enteré que ingresó al Servicio Resolución Exenta N° 272/821 de fecha 10 de mayo de 2018, en ella se resuelve redistribuir la estructura interna*



XWLHLLXGDY

de las Secretarías Regionales Ministeriales, teniendo dentro de la Unidad Asesora del Secretario Regional ministerial un Jefe de Gabinete y equipo de profesionales de apoyo, y dentro de la Unidad de Administración y Finanzas entre otras administración de personal y control de cumplimiento de las disposiciones legales atinentes a la carrera funcionaria, entre otras materias. (...) Ahora bien, consultando en varias oportunidades a José Moraga, cuál será el criterio del Ministerio, en el sentido de en qué lugar del organigrama dejarán a los profesionales de apoyo de la anterior unidad de fondo su respuesta categórica final, fue que "los profesionales de Apoyo que ven fondos concursables, estarán en la Unidad de Gestión Regional Ministerial." (...) Por tanto quisiera me entregue sus definiciones de cómo quedará compuesto el organigrama de ésta Secretaría Regional Ministerial, para poder comunicarlo a los funcionarios." Luego aparece el siguiente organigrama



A continuación el mensaje dice "Cada Secretaría Regional Ministerial estará compuesta de 4 unidades: (...) 1- Gabinete: cuenta con un Jefe de Gabinete y profesionales de apoyo (acá deberían quedar los profesionales de apoyo del servicio) (...) 2-Unidad de Administración y Finanzas (Ignacio y Susana) (...) 3.- Unidad de Gestión Regional Ministerial: está a cargo de la coordinación de organizaciones sociales, y además difusión e información de planes de gobierno. (en esta unidad debería quedar Coordinadora de Fondos y profesionales apoyo antigua unidad de fondos., y profesionales de difusión labor gobierno.) (...) 4.- OIRS. (Marcela Muñoz) (...) Por otro lado, y como asesora jurídica del servicio es mi deber velar por el fiel cumplimiento de cada instrucción que llegue de nivel central, así como de otros organismos públicos, por ello y como dentro de mis funciones está la revisión de todo documento como oficio, resolución y/o memo que ingrese al servicio, para ver en conjunto con la autoridad a quien se delega y si fuera de mi competencia o no pero igualmente encomienden, tramitarlo, o contestarlo, solicito a Ud., tenga bien instruir a su Jefe de Gabinete, o bien yo misma lo puedo hacer por encargo suyo, solicitar tanto a Sra. Erna como a DAF y al profesional de apoyo de la antigua unidad de fondos, que cada vez que reciban un mail con oficio me sea reenviado para poder tomar conocimiento y consultar con Jorge quien lo tramita, independientemente de lo cual debo hacer seguimiento para su mejor resolución., ello para llevar un orden, seguimiento, bien ud. sabe que tengo



XWLHLLXGDY

responsabilidad administrativa y además para poder hacer mi trabajo., no creo que la persona más adecuada para discriminar quien ve o no una resolución sea la Secretaria del Servicio, si disponen de la profesional adecuada para ello. (...) Le comunico que la semana anterior hablé con Jorge sobre este tema y por lo mismo y según lo conversado es que solicito se proceda a instruir a los funcionarios para que yo pueda hacer mi trabajo en este Servicio., de lo contrario es imposible como ud. comprenderá. (...) (Ley 19653, SOBRE PROBIIDAD ADMINISTRATIVA APLICABLE DE LOS ORGANOS DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO, Artículo 54.- Las autoridades de la Administración del Estado, cualquiera que sea la denominación con que las designen la Constitución y las leyes, y los funcionarios de la Administración Pública, sean de planta o a contrata, deberán dar estricto cumplimiento al principio de la probidad administrativa. El principio de la probidad administrativa consiste en observar una conducta funcionaría intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular. Su inobservancia acarreará las responsabilidades y sanciones que determinen la Constitución, las leyes y el párrafo de este Título, en su caso. Artículo 55.- El interés general exige el empleo de medios idóneos de diagnóstico, decisión y control, para concretar, dentro del orden jurídico, una gestión eficiente y eficaz. Se expresa en el recto y correcto ejercicio del poder público por parte de las autoridades administrativas; en lo razonable e imparcial de sus decisiones; en la rectitud de ejecución de las normas, planes, programas y acciones; en la integridad ética y profesional de la administración de los recursos públicos que se gestionan; en la expedición en el cumplimiento de sus funciones legales, y en el acceso ciudadano a la información administrativa, en conformidad a la ley.) (...) Por tanto quedo a la espera de su información e instrucción para el mejor proceder del Servicio a su cargo, (...) Agradece desde ya...”;

- 13) Copia de mensaje de correo electrónico remitido por la actora a la Seremi de Gobierno de Valparaíso, doña Leslie Briones Rojo, de fecha 28 de mayo de 2018, en la que se lee que: “RV: Informa nuevo organigrama del Servicio (...) Paula Opazo Berrios (...) lun 28-05-2018 11:13 (...) Para: Leslie Briones Rojo <leslje.brjones@msgg.gob.cl>; Cc: Jorge Saavedra Peña <jorge.saavedra@msgg.gob.cl>; (...) Estimada Seemi, según la resolución que llegó de nivel central por la cual se reestructuran las secretarías regionales ministeriales, según su Jefe de Gabinete la nueva reestructuración del servicio con el personal del mismo debería quedar del modo que se indica, necesito su visto bueno para ponerlo en conocimiento de la oficina...”;
- 14) Copia de segundo mensaje de correo electrónico remitido por la actora a la Seremi de Gobierno de Valparaíso, doña Leslie Briones Rojo, de fecha 28 de mayo de 2018, en la que se lee que: “Solicita pronunciamiento (...) Paula Opazo Berrios (...) lun 28-05-2018 11:46 (...) Para: Leslie Briones Rojo <leslje.brjones@msgg.gob.cl>; (...) Estimada Seremi, esperando se encuentre muy bien, le escribo porque existen ciertas situaciones que me preocupan dentro del servicio, las cuales ya las he conversado en distintas oportunidades



con el Jefe de Gabinete, y le he mandado correos anteriores a Ud. solicitando tenga a bien enviar instrucción a distintos funcionarios. (...) Por ejemplo el día viernes en la tarde cuando María José me comentó el caso de la solicitud de reconsideración presentada por un medio, me informó que la auditoría de fondos concursables realizada por la funcionaría del Ministerio no salió muy bien, en el sentido de que se encontraron por ejemplo carpetas incompletas. Además hubiera sido en demasía útil que me hubiesen invitado a la reunión de dicha funcionaría cuando le entregó su reporte, precisamente para ayudar en las falencias. A propósito de lo cual le indico que hasta la fecha no me han invitado a integrar alguna reunión de equipo para poder cooperar en el mismo. (...) Bien Ud. sabe que las autoridades y jefaturas dentro del ámbito de su competencia y en los niveles que corresponda ejercerán un control jerárquico permanente del funcionamiento de los organismos y de la actuación del personal de su dependencia. Control que se extiende tanto a la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los fines, como a la legalidad y oportunidad de las actuaciones. (Art. 10 Ley de Bases Generales de la Administración del Estado.) (...) Como le manifestaba en correo anterior," como asesora jurídica del servicio es mi deber velar por el fiel cumplimiento de cada instrucción que llegue de nivel central, así como de otros organismos públicos, por ello y como dentro de mis funciones está la revisión de todo documento como oficio, resolución y/o memo que ingrese al servicio, para ver en conjunto con la autoridad a quien se delega y si fuera de mi competencia o no pero igualmente encomienden, tramitarlo, o contestarlo, solicito a Ud., tenga bien instruir a su Jefe de Gabinete, o bien yo misma lo puedo hacer por encargo suyo, solicitar tanto a Sra. Erna como a DAF y al profesional de apoyo de la antigua unidad de fondos, que cada vez que reciban un mail con oficio me sea reenviado para poder tomar conocimiento y consultar con Jorge quien lo tramita, independientemente de lo cual debo hacer seguimiento para su mejor resolución., ello para llevar un orden, seguimiento, bien ud. sabe que tengo responsabilidad administrativa y además para poder hacer mi trabajo., no creo que la persona más adecuada para discriminar quien ve o no una resolución sea la Secretaria del Servicio, si disponen de la profesional adecuada para ello. (...) Asimismo, el Daf me informó que Ud. le instruyó que cualquier consulta que yo desee hacer al Ministerio debe ser a través del Jefe de Gabinete, que reclamaron por ello, quisiera me informe personalmente sobre ello y ¿quién le reclamó al respecto?, desde que cumpla mi función desde el año 2015, siempre que he tenido una duda la he aclarado directamente con el Coordinador de Seremis o bien Jefe de Jurídica, ya que es mejor ser diligente y eficiente en mi función que quedar con la duda o esperando para ejecutar. (...) La semana anterior recuerdo haber consultado al Coordinador de Seremis debido a la restructuración del servicio, dentro de cual nueva unidad debe quedar el personal de fondos, consulta que hice prestamente por encargo de



XWLHLLXGDY

su jefe de gabinete. (...) Por tanto, solicito pueda instruir a su jefe de gabinete, secretaria, daf y a don Aníbal que me reenvíen cualquier oficio, instrucción, memo que reciban de nivel central para poder ejecutar mi función. (...) Además para poder llevar un control de la labor del personal que ve fondos concursable, es necesario con mayor razón ud. les instruya me reenvíen cada oficio, instrucción o memo que reciban, y que por ejemplo cada día miércoles tengamos una reunión la dos personas a cargo conmigo en que me cuenten el correcto estado de avance de cada etapa en la que van para poder cooperar en las mismas. (...) Acá y supongo en cada servicio, al personal no le gusta ser fiscalizado, por tanto, si la jefatura no instruye no requerirán de oficio que yo los revise ni apoye., la instrucción debe ser por escrito aunque sea vía mail. (...) Por tanto, le reitero mi preocupación por no poder llevar adelante y de la forma más óptima y eficiente mi función, al no estar entrenada del proceder del servicio, (nunca me han enviado la agenda por ej) los requerimientos que ingresan, ni ningún asunto administrativo que requiera pronunciamiento de la autoridad. (...) Le ruego por favor instruya aunque sea vía mail al respecto, que Jorge, Sra. Erna, Ignacio y don Aníbal me reenvíen cada oficio, memo o instrucción que reciban, no obstante de lo cual, siempre le preguntaré directamente a su jefe de gabinete quién verá cada asunto, independiente de lo cual debo realizar el debido seguimiento, de esa manera su servicio será más eficiente y ordenado. (...) A la espera de sus comentarios (...) Agradece desde ya...”;

- 15) Copia de correo electrónico remitido por don José Moraga Lira Asesor Coordinador de Seremis de Ministerio Secretaría General de Gobierno a la actora, con fecha 17 de mayo de 2018, en la que se lee que: “Asunto: RE: consulta importante (...) Paula (...) Buen día, dada la reestructuración, las Unidades de Fondos, Secom etc, se suprimen y los profesionales pasan a ser profesionales de Apoyo en la Unidad de Gestión Regional Ministerial. Adjunto correo enviado a los Seremis...”;
- 16) Copia de Resolución Exenta RA N° 411/86/2018 de 12 de junio de 2018, de la Subsecretaría General de Gobierno del Ministerio Secretaría General de Gobierno, en la que se lee que: “SUBSECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO (...) TÉRMINO ANTICIPADO DE DESIGNACIÓN A CONTRATA. (...) Resolución Exenta RA N° 411/86/2018 (...) RM REGION METROPOLITANA, 12/06/2018 (...) VISTOS: Ley N° 18.834 (...) CONSIDERANDO: (...) 1.- La Resolución Exenta N° 270/166 de 16 de octubre de 2015. que depuso la designación a contrata en la planta de Profesionales, grado 8 de la Escala Úrica de Sueldos, a doña Paula Andrea Opazo Berríos. RUT N°12.721.934-6 a contar del 1 de octubre de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2015, ó mientras fueran necesarios sus servicios, para cumplir funciones como abogada de la Seremi de la V Región de Valparaíso. (...) 2.-



La Resolución Exenta TRA N°411/60/2017 de 13 de diciembre de 2017, que prorroga la contrata a Paula Andrea Opazo Berríos desde el 1 de enero de 2018 y hasta el 31 de diciembre de 2018, o mientras fueran necesarios sus servicios. (...) 3.- Que, conforme lo establecen los artículos 3° letra c) y 10° de la ley N° 18.834. y los artículos 2° y 5° letra 0 de la ley 18.883, los empleos a contrata poseen esencialmente un carácter transitorio, cuya duración máxima será solo hasta el 31 de diciembre de cada año. pudiendo concluir antes que expire su vigencia si la contratación cuenta con la cláusula "mientras sean necesarios sus servicios". (...) 4.- Que, en efecto, el artículo 11 de la ley N° 19.880. dispone, en lo que interesa, que "Los hechos» y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los lmiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio". A su vez. el artículo 41, inciso cuarta del mismo cuerpo legal, establece que las resoluciones finales contendrán una decisión fúndala. (...) 5.- Que. al tenor de lo señalado en el dictamen N° 6.400 de fecha 2 de marzo de 2018 de la Contraloría General de la República: "podrá servir de fundamento para prescindir o alterar el vínculo con un funcionar», y en la medida que se encuentre suficientemente acreditado mediante la ata de los antecedentes que respaldan esa decisión -como por ejemplo estudios o informes-, entre otros: (...) -- La modificación de las funciones del órgano y/o su reestructuración, que hagan necesario los servicios del empleado o requieran que este desarrolle funciones diversas a las desempeñadas, o por un lapso inferior al año calendario... Sin perjuicio de loa anterior, cabe recordar que el dictamen N° 48.251, de 2010.... Resolvió que la aplicación de la cláusula "mientras sean necesarios sus servicios" puede estar referida a las aptitudes personales del empelado, las cuales ya no son requeridas por el Servicio, sin que ello implique necesariamente que el organismo dejará de desarrollar las áreas que aquél se le encargaban, las cuales pueden continuar siendo cumplida por otro funcionario. No obstante, en este caso deberán expresarse las razones por las cuales los servicios del afectado dejaron de ser necesarios para el organismo" (...) 6.- Que, en virtud de lo dispuesto en la Resolución Exenta N° 272/821 de fecha 10 de mayo de 2018, de esta Subsecretaría, se procedió a aprobar la estructura interna de las Secretarías Regionales Ministeriales del Ministerio Secretaría General de Gobierno en cada Región del país, compuesta por el Gabinete de la Secretaría Regional Ministerial, la Unidad de Administración y Finanzas, la Unidad de Gestión Ministerial y por la Oficina de Informaciones. Redamos y Sugerencias, suprimiéndose toda otra unidad existente en las Secretarías Regionales Minístrenles distintas a las estipuladas en dicho acto administrativo, cualquiera fuese la denominación con que se les hubiere llamado. (...) 7.- Que, asimismo, independiente de los cambios realizados en las funciones y procesos existentes en las diversas Seremis de este Ministerio. los órganos de la



administración del Estado por expresa aplicación de los principios de eficiencia, eficacia y economicidad. se encuentran en el imperativo de efectuar permanentemente un examen crítico y sistemático de la gestión de los organismos que dirigen, a fin de verificar el uso óptimo de sus recursos y por ello, en cumplimiento de esa prerrogativa, es dable manifestar que a la fecha, la Seremi de la Región de Valparaíso no requiere contar con los servicios específicos de un abogado, ya que para tales fines, todas las Seremis de este Ministerio poseen el apoyo específico de la Unidad de Asesoría Jurídica de esta Subsecretaría, por lo que en este sentido, doña Paula Andrea Opazo Berríos ha estado ejerciendo durante todo este tiempo una duplicidad de funciones, situación que evidentemente va en desmedro económico de esta Cartera de Gobierno y que debe ser reparada por la autoridad vigente terminando anticipadamente su contrata. (...) 8.- Que, el término anticipado de la contrata de doña Paula Andrea Opazo Berríos. RUT N°12.721.934-6 será a contar de la total tramitación del presente acto administrativo. (...) RESUELVO: (...) PÓNESE TÉRMINO ANTICIPADO A LA DESIGNACIÓN A CONTRATA DE: (...) a) Don(a) PAULA ANDREA OPÁZO BERRIOS. R.U.N N° 12721934-6. como PROFESIONAL, asimilado a grado 8° ESCALA UNICA DE SUELDOS, de la Planta de PROFESIONALES del servicio SUBSECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO, con jornada de 44 horas semanales, a contar de la total tramitación del presente acto administrativo, por no ser necesarios sus servicios.”;

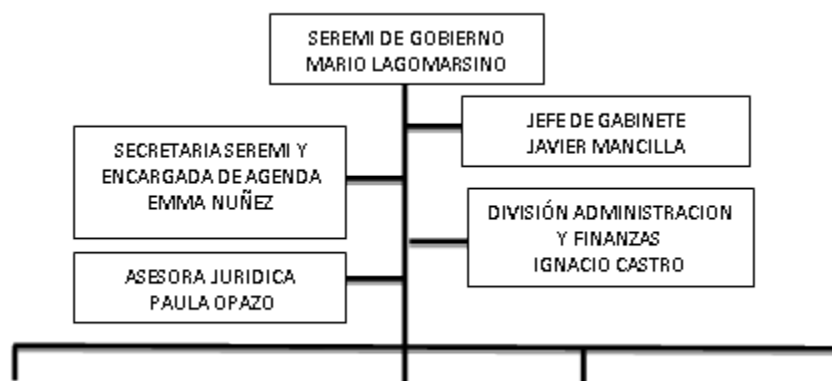
- 17) Copia del organigrama del Ministerio Secretaría General de Gobierno, obtenida del sitio web de la misma. (<http://transparencia.msgg.gob.cl/organica2.html>);
- 18) Copia de página web del Ministerio Secretaría General de Gobierno, con descripción de su estructura y organización, específicamente, las de la unidad jurídica del Ministerio. (<http://www.msgg.gob.cl/wp/index.php/estructura-y-organizacion>), en la que se indica que: “Unidad Jurídica (...) La Unidad Jurídica tiene siguientes funciones: (...) 1.-Asesorar al Ministro y al Subsecretario en los asuntos de carácter jurídico y absolver las consultas de carácter legal que le sean formuladas por éstos o los jefes de División; 2.- Revisar e informar los sumarios administrativos que se instruyan por orden del Ministro o del Subsecretario, cuando éstos así lo soliciten; 3.-Redactar y patrocinar las denuncias, querellas o demandas civiles que el Ministro o los funcionarios del Ministerio Secretaría General de Gobierno en su calidad de tales, deban formular ante los Tribunales de Justicia; y 4.-Cumplir las funciones y ejercer las atribuciones que el Ministro o el Subsecretario le encomienden o deleguen. Res. Exenta N° 272-235, crea la Unidad Jurídica la que desarrollará las funciones establecidas en el artículo N° 6 del DFL 1 del Ministerio. Esta Unidad depende de la Subsecretaría y se delega en esta Unidad, el control de legalidad de los actos jurídicos administrativos de este Ministerio, el de



mantener la comunicación y relación con la Contraloría General de la República, en todas aquellas materias que no sean de carácter financiero-administrativo.”; y

- 19) *Copia de carta LT 290/82, de 5 de julio de 2018, dirigida por don Jorge Uribe Gervasi a doña Carola Delgado Ureta, en la que se refiere que: “CARTA: LT 290/82 (...) ANT.: Solicitud de información AG001T0000648 de fecha 16 de junio de 2018. (...) MAT.: Accede a la entrega de la información solicitada por doña Carola Delgado Ureta. (...) Santiago, 05 JUL. 2018 (...) A: CAROLA DELGADO URETA (...) DE: JORGE URIBEGERVASI (...) JEFE UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO (...) Por medio del documento individualizado en el antecedente, con fecha 16 de junio de 2018, se ha dirigido al Ministerio Secretaría General de Gobierno, doña Carola Delgado Ureta, quien requiere: “Solicita copia del acto administrativo que indica el número 3, del considerando de la Resolución Exenta RA 411/84/2018 de fecha 12 de junio de 2018 de la Subsecretaría General de Gobierno”. (...) Que, conforme lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley de Transparencia, “Toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier órgano de la Administración del Estado, en la forma y condiciones que establece esta ley”. (...) Que, el artículo 5° del citado cuerpo legal dispone que son públicos los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, sus fundamentos, los documentos que les sirvan de sustento y complemento directo y esencial, y los procedimientos que se utilicen para su dictación; la información elaborada con presupuesto público; y toda otra información que obre en poder de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas en la Ley de Transparencia. (...) Que, en virtud lo anterior se estima que la información solicitada tiene el carácter de pública y que a su respecto no concurre causal de secreto alguna, que justifique la denegación de la misma. (...) Que, en relación a su solicitud de acceso a la información pública, podemos señalar que según lo informado por el Departamento de Recursos Humanos del Ministerio Secretaría General de Gobierno, lo solicitado consta en las páginas números 5 y 6 del Acta de entrega del período 2014-2017 de la Seremía de Valparaíso, las cuales se adjuntan en formato PDF a esta presentación. (...) Que, se entrega la respuesta a la información solicitada por usted de manera gratuita y mediante el envío de correo electrónico. (...) “Por orden del Subsecretario General de Gobierno, en virtud de la Resolución Exenta N°777/1707 de 2013” y con adjuntos en el que se observa un organigrama donde aparece:*





Se indica además que: “Esta Secretaría Regional Ministerial cuenta con una dotación de 19 funcionarios en la actualidad conforme al siguiente detalle: Funcionario calidad Planta: 2 (...) Funcionario calidad Contrata: 6 (...) Funcionario calidad Honorarios: 11”, luego se adjunta un documento con las funciones de cada funcionario en el que se lee que: “Funciones de cada Funcionario: (...) 1.- Mario Lagomarsino Montoya: Seremi de Gobierno Región de Valparaíso. (...) 2.- Javier Mancilla Lorca: Asesoría al Área de Informática, Realizar Plan Estratégico y Despliegue de las Actividades en Terreno de la Seremi de Gobierno y Coordinar la Agenda de trabajo con los Organismos de la Administración del Estado de la Región (...) 3.- Erna Núñez Recabarren: Secretaria Seremi, desempeñándose en funciones administrativas. (...) 4.- Paula Opazo Berrios: Asesora Jurídica. (...) 5.- Ignacio Castro Covarrubias: Encargado de Administración y Finanzas. (...) Uso de sistemas como SIGFE, SIAPER, CHILEINDICA, MERCAOO PUBLICO, GESTIÓN ENERGIA, GARANTÍAS EN INTRANET. (...) Revisar fondos concursables y custodiar garantías y administrar recursos de Difusión, Ceremonias y Seguimientos de los Fondos de Fortalecimiento y Fondos de Medios (...) Resolver tareas administrativas como: ejecutar presupuesto, velar por el buen uso de los bienes institucionales, cuidado y revisión del vehículo institucional. Control y revisión de Bitácoras, apoyo informático, control asistencia y atrasos, licencias médicas, viáticos, permisos y feriados, custodiar inventarios, Informes Ley 19.862, Pago a Proveedores, Control y ejecución Horas Extras, preocuparnos que todos los equipos e instalaciones se encuentren en condiciones óptimas para realizar las funciones propias de cada repartición de Estado, entre otros. (...) Cierres mensuales contables financieros de cada Seremi, con su respectiva Conciliación Bancaria, análisis de cuenta y Balance de comprobación de saldos. (...) Soporte al Seremi de Gobierno ante requerimientos solicitados a diario. (...) 6.- Felipe Medina Maldonado: Asesoría Especializada en Temas Relacionados con la División de Organizaciones Sociales en la Región de Valparaíso. (...) 7.- Aníbal Sánchez Arancibia: Encargado de Fondos Concursables FFOIP y FDM. (...) 8.- Carola Delgado Ureta: Encargada de Comunicaciones. (...) 9.- Pablo Toledo Cepeda: Realizar Propuestas Metodológicas de Evaluación de los Proyectos de los Fondos Concursables en la Región de Valparaíso. (...) 10.- María José Santibáñez: Apoyo operativo y logístico en materias de documentación en la Seremi de Gobierno.”



B.- Confesional, de doña **Leslie Carol Briones Rojo**, cédula nacional de identidad N° 14.138.006-0, Seremi de Gobierno de la Región de Valparaíso, quien debidamente juramentada respondió las preguntas del abogado de la denunciante e indicó que conoce a la demandante porque trabajaba en la seremi cuando asumió el cargo era la abogada encargada de unidad jurídica y del control de legalidad de los actos de la seremi dese que se incorporó el 20 de marzo del año 2018.

Expresó, que cuando se incorporó se entrevistó con la actora para conocer a los funcionarios y saber cuáles era las funciones que realizaban.

Señaló, que cuando llegó la actora siguió ocupando el cargo y siguió prestando las mismas funciones según ella detalló.

Indicó, que su relación cotidiana con Paula es una persona que estaba dentro del mismo sector fisco donde esta ella y como llevaba más tiempo en el servicio llevaba todo el centro de legalidad de los documentos que entraban al servicio y al asesoraba.

Refirió, que la oficina en que estaban trabajando Paula estaba al lado de su oficina, pero que ella no mantuvo la oficina al lado puso a al jefe de gabinete puso y a Paula la puso al lado del jefe de gabinete, la cambió.

Explicó, que ella controlaba el funcionamiento de la actora como a los funcionarios, le pedía para ello en términos verbales, le decía que le revisara los documentos y les daba el OK y los firmaba.

Manifestó, que Paula fue invitada a reuniones de trabajo al Gabinete con la frecuencia de una vez al mes, como servicio tenían una reunión una vez al mes y a esa asistían todos los funcionarios del servicio, o a veces cada 15 días, dependiendo de la contingencia. Explicando que al principio una vez al mes y a luego cada 15 días.

Sostuvo, que compartía el acceso a su agenda por medio del correo electrónico y la aplicación del teléfono que todos los funcionarios tenían acceso.

Refirió, que Jorge Saavedra es el jefe de gabinete ella llegó con él y la relación entre él y Paula a nivel personal y profesional era buena.

Indicó, que no recuerda que Paula le comunicara de obstáculos de Jorge Saavedra a sus funciones.

Se le exhibe documental de a denunciante N° 14 denominado como Copia de segundo mensaje de correo electrónico remitido por la actora a la Seremi de Gobierno de Valparaíso, doña Leslie Briones Rojo, de fecha 28 de mayo de 2018 y dice que no recuerda este correo y tampoco recuerda si lo respondió.

Expresó, que no sabe que tendencia política es Paula Opazo, pero el primer llamado que recibió fue de Sebastian Astulla que es reconocido del UDI y le dijo que Pula era muy cercana del sector nuestro, como visión política, explicando y recordando que Paula la ayudó con la declaración de intereses y patrimonio y en ese momento le dijo que había trabajado con el Presidente Sebastian Piñera y le dijo que era partidaria del sector y además de la posibilidad de haber sido becaria, pero no supo hasta que recibió la notificación de la demanda que se alejaba de la percepción que tenía de ella.

Señaló, que durante el periodo que estuvo Paula ocupó los servicios de Paula todos los días, era una profesional útil.

Indicó, que dejó de prestar servicios Paula por nivel central que tomaron la decisión de reestructurar la Seremia y adema de esto se realiza un ajuste



económico al personal y al reestructurarse se toma la decisión que el trabajo de la unidad jurídica y de Paula lo iban a visar desde nivel Santiago, porque ellos tiene una unidad jurídica y esa era la determinación.

C.- Testimonial, consistente en la declaración de:

- 1) **Katherine Patricia Araya Matus**, cédula nacional de identidad N°14.201.964-7, cientista política, con domicilio en Laura Barros 205, Departamento N° 804, Concón debidamente promesada quien respondiendo las preguntas del abogado de la denunciante, en lo sustancial expuso que conoce a la actora porqué era la abogada de la Seremi de gobierno de Valparaíso y ella era la seremi de gobierno su jefa en el periodo de marzo del año 2014 hasta julio 2017.

Señaló, que recuerda que ingresó la actora a prestar servicio en el año 2015.

Indicó, que las funciones que realizaba como en todas las seremis, era la abogada del servicio, tenía que ver licitaciones, decretos, responder a Contraloría temáticas jurídicas, asesoría que requería y dependían del servicio, temas de persona de recursos humanos, toda cuestión legal que requerirá la serimi en la región, estas funciones las realizó durante todo el periodo que estuvo, explicando que antes había otra abogada que dejó el servicio y luego de su salida llegó Paula, y entiende que siguió haciendo las funciones, lo que supo por el seremi que estaba en ese momento.

Expresó, que el organigrama y la posición de Paula era al unidad jurídica hay un letrado y un espacio físico donde prestaba sus funciones.

Señaló, que las funciones desarrolladas por Paula no podían ser desarrolladas por otra persona que no fuera abogado

Expresó, que la tendencia política no tiene que ver con las labores de Paula es un cargo técnico.

Manifestó, que la oficina de Paula mientras fue Seremi el año 2015, era una oficina al lado de la Seremi y el año 2016, se cambió a dos oficinas más lejos.

El abogado de la denunciada no contrainterroga.

El abogado de la denunciada no contrainterroga.

- 2) **Carola Alejandra Delgado Ureta**, cédula nacional de identidad N°12.845.616-3, Periodista, calle Guillermo Rivera 526, dpto. 2, Cerro San Juan de Dios, Valparaíso, debidamente promesada, en lo sustancial expuso que conoce a las partes del juicio porqué ella trabajó con Paula en la Seremi de gobierno desde el año 2015 hasta junio del año 2018.

Refirió, que ella ya no presta servicios fue despedida en junio del 2018, prestaba servicio como periodista para la denunciada.

Indicó, que las labores de Paula era de asesora jurídica y fiscalización de los procedimientos administrativos, para que se realizaran de manera correcta como concursos y documentos.

Señaló, que no conoce la tendencia política de Paula Opazo, no era algo que conversaron.



Manifestó, que dejó de prestar servicio Paula porque no necesitaban de sus servicios, pero en ese periodo fue un poco aislada de las funciones que realizaba, a veces escucha que le decían roja, a veces se dio esa conversación.

Señaló, que en marzo a junio del año 2018 escuchó esto, se produce la tensión, por la adaptación y Paula se vio aislada en que cumplía y en algunas reuniones no fue considerada. Percibía esto, como en la reuniones, antes le sacaban las firmas, ya no, pasaban solo por la autoridad, la cambiaron de oficina, le mandaban correos y fiscalizaba documento. Lo que pudo ver.

Expreso que Daf es la división de administración y finanzas

Manifestó, que la relación de Paula Opazo antes de Leslie Briones era una relación directa de trabajo técnico especialista y fue contratada para ese trabajo, explicando que por los recursos de los concursos se adjudican fondos en 80 proyectos se entrega dinero en forma pública, el trabajo era de fiscalización y técnico, para que se hiciera de manera correcta.

Sostuvo, que al llegar al nueva seremi de gobierno, tiende a poner el aspecto emocional al contar, pero en lo laboral dejó de firmar parte de las comunicaciones con la Seremi, no la llamaba para pedir la asesoría y lo sabe por lo que le contó Paula y si no pasaban ella era la responsable porque era la abogada de la oficina, en un momento ya no la llamaban para considerar su opinión si hacia la firma o no para ese procedimiento administrativo.

Agregó, que a ella la llamaban roja en un par de reuniones, de ese tiempo de mayo y junio de 2018, para actividades que se iban hacer, explicando que Paula andaba con un abrigo rojo, ella con pañuelo rojo etc. y decían *“aquí están los rojos en bloque”*, no sabía que quería decir, sería por venir del gobierno anterior.

Expresó, que entre mazo de 2018 y junio de ese año hubo reuniones de todo el grupo fue, una al mes o cada tres semanas, no habían reuniones por área, nunca al Seremi conversó con los funcionarios cuando llegó tampoco en su caso solo conversó con ella después de dos mees.

Explicó, que el recinto de la Seremi, se encuentra en el edificio de la intendencia regional, es la mitad de un piso y que tiene oficinas y que la asesoría jurídica estaba en una oficina con el gabinete y con la Seremi y cuando la cambiaron ase fue al fondo en una oficina muy particular que tiene entrada pero no tiene salida no es necesario pasar por ahí si no se tiene comunicación está escondida es chiquitita y Paula le dijo que estaba muy mal porque nadie iba a la oficina, le pido por correo y es preocupada porque es asesora jurídica y nadie le llevaba nada.

Indicó, que la agenda de la Seremi no era conocida públicamente, pero para el resto no era necesario que lo supiera, tenía acceso solo al calendario Seremi, no solo lo que se informaba para Paula ni el área jurídica, era necesario que supiera solo le informaba cosas particulares.

Expresó, que el jefe de gabinete de la seremi Jorge Saavedra, con él tuvo relación profesional y se comunicaba con él por la información que requería y era accesible para buscar información pero para responder correos no se respondían de Gabinete.

Manifestó, que la relación de Paula con Jorge Saavedra, explicó que ella le pidió que la mantuviera al tanto de lo documentos administrativos, se puso a disposición para el trabajo y le informó por las fechas de los fondos



concursables, pero nada de eso sucedió y no hubo posibilidad de contactarse y le decía que sí, pero no lo hacía, por lo anterior ella le dijo que le enviara un correo y aclarara el procedimiento de ahora en adelante y tampoco recibió respuesta, todo eso a Paula le genero agobio y fue asilada. El ánimo del Paula dejo de ser tan concentrada por lo emocional y lo ya descrito, la vio con un estado de ánimo bastante bajo.

Contrainterrogada, por el abogado de la denunciada en lo fundamental agregó, que las oficinas de la Seremía de gobierno para graficarlo y si se mira por encima es con la forma de una “U”, las oficinas están al lado poniente, hay cuatro oficinas, la de la Seremi, una segunda oficina donde está el asesor jurídico Paula y luego el jefe de gabinete y después ella como periodista. Explicó que la oficina de Paula tenía ventana y vista al cerro y al mar todas las oficinas tenían esas características y también la oficina del fondo y la de ella.

Agregó, que Paula es la única abogada de la Seremi, y que la desvincularon en junio del año 2018, supo de la restructuración de la Seremi cuando se le notificó a ella.

D.- Oficios, se recibieron las respuestas a los oficios solicitados por la denunciada en los siguientes términos:

1. **Servicio Electoral**, Dirección Regional de Valparaíso, ubicada en Calle Blanco N° 625, Piso 6, Edificio Los Héroes, Valparaíso, a fin de que informe al Tribunal acerca de la fecha de afiliación y desafiliación de doña Paula Andrea Opazo Berríos, cédula de identidad N° 12.721.934-6, al Partido por la Democracia PPD, en el que se indica que: *“DE : DIRECTORA SERVICIO ELECTORAL REGIÓN DE VALPARAÍSO (S) A: (...) JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE VALPARAÍSO (...) En atención a su consulta, informo a US., que, teniendo a la vista la información proporcionada con fecha 8 de octubre de 2018 por la Dirección Nacional, en el Archivo de los Duplicados de Registros Generales de Afiliados según comunicaciones de los partidos políticos, que conserva este Servicio, doña PAULA ANDREA OPAZO BERRÍOS, C.I. N° 12.721.934-6; figuró con afiliación política en el PARTIDO POR LA DEMOCRACIA, entre el 05 de febrero de 2016 y el 03 de enero de 2018, fecha esta última en que presentó a través de nuestra plataforma online, su renuncia a dicha colectividad. A la fecha, la señora Opazo no figura con afiliación política vigente.”*

2. **Ministerio Secretaría General de Gobierno**, Palacio de la Moneda S/N, Santiago, a fin de que informe al Tribunal acerca de la estructura de remuneraciones de doña Paula Andrea Opazo Berríos, cédula de identidad N° 12.721.934-6, especialmente, acerca de los requisitos y forma de pago del bono por Programa de Mejoramiento de la Gestión PMG, en el que se refiere que: *“DE: SUBSECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO (...) De mi consideración, (...) Por medio del presente y de acuerdo a lo solicitado, en relación a la estructura de remuneraciones de la Sra. Paula Andrea Opazo Berríos, RUT 12.721.934-6. Especialmente los requisitos y forma de pago del Bono por Programa de Mejoramiento de la Gestión PMG. Al respecto puedo manifestar lo siguiente: (...) En primer lugar, se debe tener presente que los requisitos para el pago de la Asignación de Modernización (PMG) se encuentran establecidos en el art. 1 de la Ley 19.553 para los funcionarios de planta y contrata de las instituciones regidas por las normas remuneratorias del DL N° 249 de 1973, Escala Única de Remuneraciones, como es el caso, la que se paga a los funcionarios en servicio,*



en cuatro cuotas, los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre, y cuyo monto a pagar en cada cuota, será equivalente al valor acumulado en el trimestre respectivo, como resultado de la aplicación mensual de esta asignación que contiene los siguientes componentes.” se agrega, el siguiente cuadro

Ministerio Secretaría General de Gobierno	2018	Grado de cumplimiento Global institucional 2018 100% (*)
Componente Base (Art. 5 Ley 19.553)	15	
Incremento por Desempeño Institucional (Art. 6 Ley 19.553)	7,6	
Incremento Colectivo (Art. 7 Ley 19.553)	8	

(*) Resolución Exenta N° 272/345 de 2018- Decreto Exento N° 10 de 2018 MINSEGEFOB

Y continua la respuesta que: “...Los porcentajes que se señalan en los artículos antes citados, se aplican sobre los estipendios indicados en el artículo 4 de la Ley 19.553, según corresponda. (...) En este contexto es preciso indicar que la jurisprudencia administrativa ha manifestado que un servidor que haya cesado en funciones, cualquiera sea la causa, sin haber completado el trimestre como es el caso de la Sra. Opazo Berríos, quien cesó en sus funciones a contar del 15 de junio de 2018, solo tiene derecho al pago de las cuotas de esta asignación por los meses efectivamente trabajados, esto es, enero a mayo, pero no por la fracción del mes de junio que no se desempeñó en forma completa como es el caso (Aplica Dictamen N° 63.292 de 2004 Contraloría General de la República) (...) Para tal efecto, se adjuntan las últimas 6 liquidaciones de remuneraciones de la Sra. Opazo Berríos mediante las cuales se puede observar la estructura de pago de las remuneraciones de la cita exfuncionaria de la Secretaría Regional Ministerial de Gobierno Región de Valparaíso. (...) Se adjuntan los siguientes documentos: (...) Ley 19.553 Concede asignación de modernización y otros beneficios que indica. (...) Dictamen N° 63.292 de 2004 Contraloría General de la República (...) REX N° 272/345 de 2018 Establece grado cumplimiento de las metas de gestión del convenio colectivo del MINSEGEFOB y porcentaje de incremento por desempeño que corresponde recibir a cada equipo. (...) DEX N° 10 de 2018 Señala grado de cumplimiento global del PMG alcanzado en el 2017 y porcentaje de incremento por desempeño institucional de la asignación de modernización art. 6 Ley 19.553 que corresponde percibir al MINSEGEFOB (...) Liquidaciones de remuneraciones de enero a junio de 2018 de la Sra. Paula Opazo Berrios.”

QUINTO: Audiencia de juicio. Prueba de la denunciada. La parte denunciada, con la finalidad de acreditar sus dichos ofreció en la audiencia preparatoria e incorporó en la audiencia de juicio, la siguiente prueba.

A.- Documental, consistente en:

- 1) Resolución TRA N°411/60/2017 de fecha 13 de diciembre de 2017, de la Subsecretaría General de Gobierno, que prorroga contrata de doña Paula Opazo Berríos, en donde aparece en la página 25 doña Paula Andrea Opazo Berrios y se indica su RUT: 12.721.934-6; el cargo, de Profesional; grado 8; escala de sueldo, escala única de sueldos; planta, profesional; Servicio, Subsecretaria General de Gobierno; horas semanales, 44,0; Fecha desde, 01/01/2018; y fecha hasta 21/12/2018;



- 2) Resolución Exenta N°272/821 de fecha 10 de mayo de 2018, de la Subsecretaría General de Gobierno, que aprueba estructura interna de las Secretarías Regionales Ministeriales del Ministerio Secretaría General de Gobierno, que es la misma ya transcrita en el N° 4 letra A) de la prueba documental de la denunciante en el considerando anterior, destacando el abogado de la denunciada la parte resolutive; y
- 3) Resolución Exenta RA N°411/86/2018 de fecha 12 de junio de 2018, de la Subsecretaría General de Gobierno, que pone término anticipado de designación a contrata de doña Paula Opazo Berríos, que es la misma ya transcrita en el N° 16 letra A) de la prueba documental de la denunciante en el considerando anterior, destacando el abogado de la denunciada los considerando 1 y 7.

B.- Confesional de doña **Paula Opazo Berríos**, ya individualizada quien debidamente juramentada respondió las preguntas del abogado de la denunciante e indicó que tomó conocimiento de la restructuración, no recuerda bien al fecha, antes de la desvinculación, como el año anterior en el mes de mayo del año 2018, es la única abogada del servicio, luego no sabe si se contra otro abogado.

C.-Testimonial, consistente en la declaración de **Ignacio Esteban Castro Covarrubias**, cedula nacional de identidad N° 14.542.606-5, encargado de Administración y Finanzas, de la seremi de gobierno, debidamente juramentado, en lo sustancial respondió al abogado de la denunciada que el daf es la división de finanzas y esta encaramado de esa unidad desde el año 2015 a la fecha ve los temas administrativos, explicando que ingresó el 1 de enero de 2011.

Refirió, que conoce a Paula, entró al servicio el año 2015, prestaba funciones de abogada y revisaba al documentación antes que firmara la Seremi, ella era la única abogado y desde que ingreso en el año 2011 hasta que llegó la Sra. Paula, no sabe si habían otros abogados ya que estaba en otra unidad.

Señaló, que las fusiones que realizaba era ver convenios, fondos concursables, los convenios los revisaba antes de la firma de la Seremi.

Expresó, que las funciones de Paula las prestaba en la oficina del servicio que estaba ubicada en la oficina de la Seremi, la jefa de gabinete y Paula en otra oficina, la forma del lugar es como una "L", explicando que es como el gabinete. Agregó, que la oficina de Paula es con ventana, roler y con vista al mar, tenía computado, escritorio y todo eso era el 2018.

Indicó, que cuando entró al Seremi actual y coloca a donde estaba Paula al jefe de Gabinete y la trasladó a dos oficinas hacía el costado.

Manifestó, que la prestación de servicio de Paula para la Seremía anteriormente era lo mismo estaba encargada de temas administrativos de la misma manera que lo dijo anteriormente.

Expresó, que la relación de Paula con la nueva Seremi era buena, no había ninguna discusión.

Sostuvo, que Jorge Saavedra era el jefe de gabinete el 2018, de la nueva administración, ya no lo es, renunció el año 2018, sin recordar fecha exacta.



Señaló, que la restructuración en la Seremi fue cuando llegó este nuevo gobierno, política de austeridad y un nuevo organigrama ciertas áreas ya no existirían, como la unida jurídica, y eso paso en todas las Seremias a nivel regional y ahora todos los convenios se envían digital y llegan los vistos buenos y se le pasa a al Seremí para su firma.

Expresó, que doña Paula en la unida jurídica ya no está, dejó de estar no recuerda si fue el año pasado, llegó un memo.

Manifestó, que la restructuración afecto a la Seremi de gobierno, el tema era netamente la austeridad, acortar los recursos y la documentación se va a Santiago. La Seremi no cuenta con otro abogado desde que se fue Paula. La decisión fue de nivel central, no le preguntaron la opinan a ellos.

Indicó, que los requisitos para entrar al servicio desde que esta él, hace 10 años, nunca ha sido por concurso, se exige el título profesional para las contrata, pero se elige a dedo y de su experiencia puede decir que no hay concurso público para las contrata.

Señaló, que respecto del pensamiento político no sabe si es un elemento para considerar la contratación.

Agregó, que la forma de trabajar de la Seremi cuando ingresó era en reuniones los conoció de como equipo y a los más antiguos les pedía la opinión de cómo se trabajaba, ya que estaba recién llegada, en esas reuniones estaba Paula, Jaime el conductor, los más antiguos para darle la opinión, como experiencia.

Manifestó, que la relación de la Seremi con sus funcionarios es buena es bien cercano en cuanto a, los permisos y enfermedades siempre puertas abiertas. La agenda la Seremi no la conoce, no la maneja ya que eso lo ve el jefe de gabinete.

El abogado de la denunciante no contrainterroga.

SEXTO: Alegatos de observación a la prueba. Las partes hicieron uso de la posibilidad de realizar alegatos de observación a la prueba y ambas mencionaron que con la prueba rendida habían justificado sus alegaciones y defensas respectivamente, solicitando por una parte se acogiera la demanda en todas sus partes y por la otra se rechazara y ambos con expresa condenación en costas.

SEPTIMO: Valoración de la prueba. Valorada la prueba de acuerdo a la sana crítica conforme lo establece el artículo 456 del Código del Trabajo, esto es, conforme las razones, jurídicas, lógicas, científicas, técnicas o de la experiencia inspirada en los principios que emanan de la legislación laboral, se puede establecer con la prueba incorporada lo que se dirá a continuación.

OCTAVO: En cuanto a los hechos constitutivos de actos de discriminación en razón de la opinión política de la denunciante Paula Opazo Berríos. La denunciante alega en un extenso relato los acontecimientos vividos durante la relación como personal a contrata grado 8, del Ministerio Secretaria General de Gobierno en la Secretaría Ministerial de la cartera de la ciudad de Valparaíso, luego de asumir como Seremi de dicha servicio ministerial la Sra. Leslie Briones Rojo, militante de Renovación Nacional, de distinta tendencia política de la actora, lo que se verificó: en un cambio de trato consistente en que no quiso conocerla personalmente, no compartió la agenda de su trabajo, ser excluida de las reuniones de equipo de trabajo, ser tilda de “roja”; persecución y notoria



desconfianza por el trabajo que realizaba como la entrega de la oficina, solicitud de informes para cada uno de las firmas y las actividades que realizaba por más menores que fueran, obstaculización de su trabajo por el jefe de gabinete Sr. Jorge Saavedra y otros funcionarios; e indiferencia. Todo lo anterior, le causó, según refiere la actora un gran pesar.

Aseveró, que el Ministerio Secretaría General de Gobierno justificó su desvinculación el día 15 de junio de 2018, en su reorganización implementada por la Subsecretaría del mencionado gabinete, por las Resoluciones N^{os} 272/495 y 272/821, de 12 de marzo y 10 de mayo, respectivamente, y ambas del año 2018, la primera con una supuesta finalidad de redistribuir y unificar ciertas funciones en las Seremis Regionales; y la segunda, que aprobó la estructura interna de las mismas, no obstante era para explicar los despidos por motivos políticos al interior de la administración, sin embargo lo anterior resulta contradictorio, ya que, algunas de las unidades que dejaban de existir según la susodicha reorganización, en la práctica, seguían funcionando; y, además, porque no le debía afectar, pues, no estaba adscrita a ninguna unidad o división particular del Ministerio Secretaría General de Gobierno.

Dicho lo anterior, resulta necesario determinar si con la prueba incorporada al juicio se pudo acreditar los supuestos fácticos que la denunciante señalaba como antecedentes que permitían configurar el ambiente de contexto discriminatorio en el que realizó sus labores luego de la asunción de la Seremi Sra. Leslie Briones Rojo y que culminó con su desvinculación por un acto de discriminación en razón de su opinión política, teniendo en cuenta el método de apreciación de indicios de los ya referidos hechos y además de otros indicados en el libelo de denuncia como: el cambio de gobierno ocurrido el 11 de marzo de 2018 y la asunción del cargo de la Seremi del Ministerio Secretaría General de Gobierno, Sra. Leslie Rojo Briones, persona de un partido político integrante de la coalición del nuevo gobierno y, consecuentemente, de tendencia política contraria a la del gobierno anterior y a la suya propia; su conocida tendencia política de izquierda; su calidad de ex militante del Partido PPD, así como su abierta simpatía por los partidos de oposición al actual gobierno; y su designación en el cargo durante el gobierno de la Sra. Michelle Bachelet Jeria.

A continuación me referiré a cada uno de estos puntos.

NOVENO: En cuanto a la situación de contexto explicada por la denunciante que dan cuenta de las circunstancias anteriores y coetaneas a la asunción de la Seremi Sra. Leslie Briones Rojo. La denunciante explica y sostiene como indicios, de su desvinculación anticipada de su contrata del año 2018, cinco circunstancias referidas al último cambio de gobierno, la asunción del cargo de la Seremi del Ministerio Secretaría General de Gobierno, Sra. Leslie Rojo Briones, su calidad de ex militante del partido PPD, su conocida tendencia política de izquierda y su designación en el cargo durante el gobierno de la Sra. Michelle Bachelet Jeria.

Respecto del último cambio de gobierno y aun cuando no se aportó prueba al respecto, resulta un hecho público y notorio que ocurrió el día 11 de marzo de 2018, asumiendo Sebastián Piñera Echenique, como Presidente de la República, ex militante del partido Renovación Nacional y apoyado por la coalición Chile Vamos, integrada por los partidos Unión Demócrata Independiente, Renovación Nacional, Regionalista Independiente Demócrata y Evópoli.



De la misma forma, también es un hecho público y notorio que la Ex presidenta la Sra. Michelle Bachelet Jeria, fue elegida Presidente de la República, en dos periodos entre el 11 de marzo de 2006 y el mismo día del año 2010, siendo electa por segunda vez para el mandato comprendido entre el 11 de marzo del año 2014 y la misma fecha del año 2018, perteneciente al Partido Socialista de Chile y apoyada por la coalición política la Nueva Mayoría conformada por el Partido Demócrata Cristiano, Partido Socialista de Chile, Partido por la Democracia, Partido Radical Socialdemócrata, Partido Comunista de Chile, Partido Izquierda Ciudadana de Chile y el Movimiento Amplio Social.

Se acreditó, mediante el oficio del Servicio Electoral, Dirección Regional de Valparaíso, incorporado al juicio que la denunciante Paula Opazo Berríos, figuró con afiliación política en el Partido por la Democracia, entre el 05 de febrero de 2016 y el 03 de enero de 2018, fecha esta última en que presentó a través de la plataforma online del servicio, su renuncia a dicha colectividad.

Se justificó en el juicio, que Paula Opazo Berríos ingresó a a prestar servicios en calidad de contrata para la denunciada Ministerio Secretaría General de Gobierno el día 1 de octubre del año 2015, conforme la copia de Resolución 270/166, de fecha 16 de octubre de 2015.

Finalmente, en cuanto que la denunciante Paula Opazo Berríos fuera conocida de tendencia de izquierda, solo se pudo inferir al escuchar a la testigo Carola Delgado Ureta al decir que en unas de las primeras reuniones de trabajo, como en el mes de mayo o junio del año 2018, se le dijo a la actora *“aquí están los rojos en bloque”*, atribuyéndolo, a que sería por venir del gobierno anterior.

Además, hizo presente en su denuncia que en los periodos calificatorios de los años 2016 y 2017, fue calificada en lista 1 y con un puntaje de 100,00, lo que fue acreditado con la copia de hoja de calificación. Como también, fue justificado en el transcurso del juicio sus competencia mediante con las copias de certificado de: Magíster en Derecho, con mención en Derecho Público, correspondiente a la actora y otorgado por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, con fecha 28 de febrero de 2017, aprobación de Diplomado en Derecho Administrativo, correspondiente a la actora y otorgado por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, con fecha 18 de abril de 2018; y postítulo en Asesoría Jurídica de la Empresa, correspondiente a la actora y otorgado por la Universidad del Desarrollo, con fecha 12 de agosto de 2008.

De lo anteriormente expuesto se puede acreditar en el juicio que Paula Opazo Berríos mientras era militante del PPD fue nombrada a contrata, el año 2015, en el Ministerio Secretaría General de Gobierno, en el tiempo que era presidente la Sra. Michelle Bachelet Jeria, siendo sucedida en dicho cargo por el Sr. Sebastián Piñera Echenique de contraria tendencia política que la anterior. Que Opazo Berríos durante los periodos calificatorios de los años 2016 y 2017 estuvo en lista uno con calificación 100,00 y que dejó de militar el en el mencionado partido el 3 de enero del año 2018, antes de la asunción del nuevo presidente y que su tendencia política era conocida por su grupo de trabajo.

DECIMO: En cuanto a la situación de contexto explicada por la denunciante que dan cuenta de las circunstancias posteriores a la asunción de la Seremi Sra. Leslie Briones Rojo. Conforme los escritos del periodo de discusión no fue un hecho discutido que en la Ministerio Secretaría General de Gobierno, y específicamente, en su secretaría Regional Ministerial de Valparaíso asumió como Secretaria



Regional la Sra. Paula Leslie Briones Rojo, quien además, consultada en el juicio indicó que se incorporó a dicha Seremía el día 20 de marzo del año 2018.

En cuanto al cambio de trato que alega la denunciante Paula Opazo Berríos, se pudo escuchar en juicio a la testigo presencial de los hechos Carola Delgado Ureta que luego de la llegada de la Sra. Leslie Briones Rojo a Opazo Berríos la asilaron; no la consideraron, en algunas reuniones; no le sacaban la firma; la cambiaron de oficina, a una del fondo, chiquitita, escondida, muy particular, que tiene entrada, pero no salida, explicando que no es necesario pasar por ahí si no se tiene comunicación con Paula; y la llamaron roja, en las circunstancias que ya se explicó en el considerando anterior. Además, escuchó, de la actora, que no la llamaba para pedir asesoría y que nadie iba a la oficina y nadie le llevaba nada. También, supo de la relación de Paula Opazo Berríos con Jorge Saavedra, jefe de gabinete de la Sra. Leslie Briones Rojo y refirió que ella le pidió a éste que la mantuviera al tanto de los documentos administrativos, poniéndose a disposición para el trabajo, informándole las fechas de los fondos concursables, pero nada de eso sucedió y no hubo posibilidad de contactarse, aunque le decía que sí, pero no lo hacía. Finalmente, por insinuación de la testigo le envió Paula Opazo Berríos un correo con la finalidad de aclarar el procedimiento de ahora en adelante y tampoco recibió respuesta.

Corroboro lo dicho por la anterior deponente la testigo Katherine Araya Matus en cuanto que cuando ella fue Seremi de la Secretaría Ministerial en Valparaíso de la Secretaría General de Gobierno el año 2015, Paula Opazo Berríos estaba en una oficina al lado de la Seremi y que luego se cambió a dos oficinas más lejos.

De igual manera, ratificó lo anterior el testigo de la denunciada el Sr. Ignacio Castro Covarrubias quien también afirmó que cuando entró al Seremi actual –Sra. Leslie Briones Rojo- coloca a donde estaba Paula al jefe de Gabinete y a ella la trasladó a dos oficinas hacía el costado.

Se agregaron al juicio tres correos electrónicos, enviados por la actora a la Seremi de Gobierno de Valparaíso, Sra. Leslie Briones Rojo, uno de fecha 23 y dos de fecha 28, todos del mes de mayo del año 2018, en cuyos asuntos se lee, respectivamente *“Solicita instrucción”*, *“RV: Informa nuevo organigrama del Servicio”* y *“Solicita pronunciamiento”* en los que pide información respecto de la nueva organización del servicio, de la aprobación de aquella organización y de la insistencia para su decisión respecto de ese y otros temas administrativos, de los cuales ante la afirmación del abogado de la denunciante que no hubo respuesta nada dijo la contraria, es más, se le exhibió a la Sra. Leslie Briones Rojo uno de los correos del 28 de mayo de 2018 dijo que no lo recordaba como tampoco haberlo respondido. Lo anterior, es concordante con la declaración de Carola Delgado Ureta en cuanto que a Paula Opazo Berríos no la consideraban.

Por su parte, la prueba documental de la denunciada Ministerio Secretaría General de Gobierno no se refirió a estas circunstancias de hecho y la de testimonial de Ignacio Castro Covarrubias, controvirtió lo expuesto por las Carola Delgado Ureta dado que mencionó, que la relación de Paula Opazo Berríos con la nueva Seremi Leslie Briones Rojo era buena, no había ninguna discusión y agregó, que la forma de trabajar de la Seremi cuando ingresó era en reuniones donde estaba Paula Opazo Berríos, Jaime el conductor y los más antiguos para darle la opinión, como experiencia.



Respecto de los testimonios controvertidos parece más creíble el de la testigo Carola Delgado Ureta el que se encuentra apoyado en algún de sus dichos por las declaraciones de otro testigo Katherine Araya Matus, documental y también del deponente de la contraria Ignacio Castro Covarrubias. Debe tenerse presente, además, que éste último deponente sigue siendo dependiente de la Seremi Sra. Leslie Briones Rojo.

Así las cosas, el Tribunal deberá tener por acreditado los siguientes supuestos fácticos propuestos en la denuncia en cuanto que Paula Opazo Berríos luego de la asunción de la Secretaria Regional Ministerial del Ministerio Secretaría General de Gobierno la Sra. Leslie Briones Rojo, en mayo del año 2018, sufrió un cambio de trato consistente según lo referido anteriormente por el aislamiento, desconfianza, exclusión en los trabajos propios a su cargo y de las reuniones de equipo de trabajo, como también de la obstaculización de su trabajo por el Jefe de Gabinete.

No fue posible dar por acreditado en el juicio las afirmaciones de la denunciada consistete en la obstaculización de su trabajo por otros funcionarios; de la solicitud de informes para cada uno de las firmas y las actividades que realizaba por más menores que fueran; que la Sra. Leslie Briones Rojo no quiso conocerla personalmente; y no compartir la agenda de su trabajo.

DECIMO PRIMERO: En cuanto a las instrucciones de redistribución y unificación de ciertas funciones en la Ministerio Secretaria General de Gobierno. En el juicio se pudo establecer con la copia de las resoluciones 272/495 y 272/821, de 12 de marzo y 10 de mayo, que el Ministerio Secretaria General de Gobierno implementó un plan con la finalidad de redistribuir y unificar ciertas funciones en las Seremis Regionales y aprobando la estructura interna de las mismas.

En efecto, si se observa la Resolución 272/495, lo que ordena por una parte es la reorganización de las dependencias del Ministerio y en lo concerniente de las respectivas Secretarías Regionales de Gobierno en dos unidades la de División de Organizaciones Sociales, con los departamentos de: Estudios, Territorio y Comunicaciones; Formación y Participación Ciudadana; y Coordinación Administrativa; y la División Secretaría de comunicaciones con sus departamentos de: Estudios, Territorio y Comunicaciones; Formación y Participación Ciudadana; y Coordinación Administrativa. Por otra, instruye en su numeral 3° Adecuar el personal del Ministerio y de sus respectivas Seremias Regionales en virtud de lo establecido precedentemente por la presente resolución.

Lo anterior fue ratificado con las declaraciones de la absolvente Sra. Leslie Briones Rojo, el testigo Ignacio Castro Covarrubias y de la declaración de la deponente de la denunciante Carola Delgado Ureta.

DECIMO SEGUNDO: Respecto del término de los servicios y sus fundamentos. No un fue hecho discutido la fecha del término anticipado de la de la contrata que vinculaba a Paula Opazo Berríos con el Ministerio Secretaria General de Gobierno, como tampoco su comunicación y los fundamentos consignados en el mentado término.

Por lo anteriormente expuesto y sin entrar a mayores detalles, lo referido en el párrafo preliminar fue confirmado por la prueba documental incorporada por las partes orientadas a tal fin, consistente en la copia de Resolución Exenta RA N° 411/86/2018 de 12 de junio de 2018, de la Subsecretaría General de Gobierno del



Ministerio Secretaría General de Gobierno, en la que se lee que: “SUBSECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO (...) TÉRMINO ANTICIPADO DE DESIGNACIÓN A CONTRATA.” Y confirmada por los testigos Katherine Araya Matus, Carola Delgado Ureta e Ignacio Castro Covarrubias, aunada a las declaraciones de la Sra. Leslie Briones Rojo.

Lo relevante de lo anterior es dejar por sentado que la decisión formal de Ministerio Secretaría General de Gobierno del término anticipado de la contrata luego de dar cuenta de las normas, dictámenes y restructuración ya referida que sustentarían su pronunciamiento fue según se lee en la referida resolución en su numeral 7 que: “...asimismo, independiente de los cambios realizados en las funciones y procesos existentes en las diversas Seremis de este Ministerio, los órganos de la administración del Estado por expresa aplicación de los principios de eficiencia, eficacia y economicidad, se encuentran en el imperativo de efectuar permanentemente un examen crítico y sistemático de la gestión de los organismos que dirigen, a fin de verificar el uso óptimo de sus recursos y por ello, en cumplimiento de esa prerrogativa, es dable manifestar que a la fecha, la Seremi de la Región de Valparaíso no requiere contar con los servicios específicos de un abogado, ya que para tales fines, todas las Seremis de este Ministerio poseen el apoyo específico de la Unidad de Asesoría Jurídica de esta Subsecretaría, por lo que en este sentido, doña Paula Andrea Opazo Berríos ha estado ejerciendo durante todo este tiempo una duplicidad de funciones, situación que evidentemente va en desmedro económico de esta Cartera de Gobierno y que debe ser reparada por la autoridad vigente terminando anticipadamente su contrata..”

Queda pendiente analizar entonces la hipótesis controvertida en este juicio, esto es, si la motivación de la Ministerio Secretaría General de Gobierno, para poner término anticipado a la contrata de Paula Opazo Berríos era real o escondía la discriminación política en razón de tener la actora una tendencia política conocidamente distinta a la del gobierno de su jefatura.

Desde ya adelantar que se observa la resolución dos ideas “la Seremi de la Región de Valparaíso no requiere contar con los servicios específicos de un abogado, ya que para tales fines, todas las Seremis de este Ministerio poseen el apoyo específico de la Unidad de Asesoría Jurídica de esta Subsecretaría” y la “duplicidad de funciones”, debiendo acreditarse, entonces, para justificar la decisión de la autoridad, que la Unidad de Asesoría Jurídica de la Subsecretaría realiza las funciones que hace el abogado en la Secretaría Ministerial Regional de Valparaíso y para ello primero hay que desentrañar ¿cuáles eran las funciones que desempeñaba Paula Opazo Berríos para Ministerio Secretaría General de Gobierno? y luego, discernir si las labores que desempeñaba generaban una duplicidad de funciones, estas interrogantes servirán a continuación para responder el núcleo central de las teorías controvertidas en este juicio.

DECIMO TERCERO: Apreciación de indicios con relación a los hechos acreditados. Resulta necesario dedicarle algunas líneas, este método probatorio que reconoce la desigualdad respecto al acceso a los medios de prueba, toda vez que, en muchos casos las partes en un juicio no se encuentran en pie de equivalencia, como sucede en el caso laboral¹. Por esta razón, nuestra legislación

¹ Sea porque tienen diferentes grados de control sobre el medio de prueba o el entorno donde se produjo, por dispares condiciones socioeconómicas, por tener distintos grados de conocimientos respecto a ciertas áreas o procesos productivos,



y nuestra práctica jurídica cada vez admiten más hipótesis donde es posible aplicar principios de facilidad probatoria y que modifican la carga de la prueba, necesaria para no volver ilusoria la justa resolución de los conflictos.

Lo anterior no significa que el denunciante, en este caso la trabajadora, quede exento de rendir prueba. A él le corresponde probar ciertos hechos que permitan, a lo menos, configurar indicios necesarios de los actos discriminatorios. Recordemos aquí que la finalidad de la facilidad probatoria está orientada a la acreditación de hechos en los cuales es difícil proveerse por quien lo pretende de fuentes probatorias directas.

En razón de lo anterior, dentro de una proposición fáctica que pretende probarse como constitutiva de discriminación, se debe distinguir entre aquellas circunstancias que son de contexto y accidentales de aquellas que configura(n) el núcleo constitutivo de vulneración propiamente tal.

En este orden de ideas, la correcta metodología de la prueba indiciaria es morigerar el estándar probatorio respecto de todos aquellos hechos propuestos por el denunciante y revisar en cuáles de ellos se encuentra imposibilitado total o parcialmente de constituir una prueba fehaciente de su proposición.

Por lo anterior, es relevante que el denunciante explique y proponga las circunstancias de contexto detalladamente que permitan al juez comprender el problema planteado en sus circunstancias de contexto y con ello poder discernir, cuáles serán los hechos a probar y luego, al momento de decidir, como aquellos hechos configuran los indicios constitutivos de la vulneración alegada. Tal requerimiento guarda correlato con la exigencia del artículo 490 del Código del Trabajo, que exhorta y pretende que el denunciante aporte el mayor número de antecedentes posibles que permitan al juez, desde un inicio, tener la claridad necesaria, a la vista del actor, como se concretarían estos elementos y como éstos, además, permiten indiciariamente constituir los hechos y actos discriminatorios alegados.

Como se ha analizado precedentemente respecto de las proposiciones fácticas de la actora de contexto anteriores al término anticipado de la contrata fueron probadas, debido a que se trataba de circunstancias que pueden calificarse de relativa y fácil obtención con prueba directa en el juicio tanto testimonial, confesional y documental y así quedó establecido que Paula Opazo Berríos hasta el mes de mayo del año 2018, había desarrollado un trabajo considerado de buena forma, calificada en lista una con una nota de 100, 00 y capacitada para desempeñar sus funciones para las cuales fue contratada.

Seguidamente, que el Ministerio Secretaría General de Gobierno implementó un plan con la finalidad de redistribuir y unificar ciertas funciones en las Seremis Regionales y aprobando la estructura interna de las mismas.

Subseguidamente, con la asunción de la Seremi las Sra. Leslie Briones Rojo el trato con ella sufrió un cambio de las condiciones de trabajo consistente en el aislamiento, desconfianza, exclusión en los trabajos propios a su cargo y de las reuniones de equipo de trabajo, como también de la obstaculización de su trabajo por el Jefe de Gabinete.

Finalmente, el término anticipado de la contrata, por la decisión formal de Ministerio Secretaría General de Gobierno, según se lee en Resolución Exenta RA N° 411/86/2018 de 12 de junio de 2018, de la Subsecretaría General de Gobierno del Ministerio Secretaría General de Gobierno.

etc.



Todo lo anterior según se explicó en los considerandos noveno al décimo segundo.

Estos hechos sin duda no pueden aisladamente analizados lograr develar cual es la razón por la que se puso término a la contrata de Paula Opazo Berríos, circunstancia difícil de probar, es aquí donde resultan relevante los indicios, de los hechos ya acreditados y conforman los antecedentes que logran hacerse fuertes y sirven para inclinarse por la teoría del caso propuesta por la denunciante mediante la prueba de indicios, según se explica a continuación aunado, además, a la prueba documental incorporada por la denunciada consistente en la copia del organigrama del Ministerio Secretaría General de Gobierno, obtenida del sitio web de la misma y copia de página web del Ministerio Secretaría General de Gobierno, con descripción de su estructura y organización, específicamente, las de la unidad jurídica del Ministerio.

Como se pudo conocer en el juicio con las declaraciones de los testigos Katherine Araya Matus, Carola Delgado Ureta y Ignacio Castro Covarrubias como de la declaración de la Sra. Leslie Briones Rojo las funciones de la denunciante Paula Opazo Berríos para el Ministerio Secretaría General de Gobierno y específicamente en la Secretaría Ministerial de esa repartición, consistían en una multiplicidad de acciones cotidianas relacionadas genéricamente con asesorar a la autoridad en todas las actos administrativos que se gestionaban en el servicio como resoluciones, oficios, contratos tanto de personal como comerciales relacionados con licitaciones y fondos públicos. Nótese que estas funciones eran realizadas por Paula Opazo Berríos para de manera transversal, prestando apoyo a todo el personal y los diferentes departamentos del servicio, lo que es concordante con la adscripción general que hacen los actos formales de la actora a su cargo y función, consistentes en las resoluciones 270/166 de 16 de octubre de 2015 y de fechas 27 de noviembre de 2015, 30 de noviembre de 2016 y 30 de noviembre de 2017 que contratan y prorrogan los servicios de Paula Opazo Berríos, sin indicar departamento o unidad a la cual debe específicamente dedicarse en virtud de su vínculo con el Ministerio tantas veces nombrado.

Ahora bien en cuanto que la Unidad de Asesoría Jurídica de la Subsecretaría realiza las funciones que hacía el abogado en la Secretaría Ministerial Regional de Valparaíso, es del caso que la denunciada no incorporó ningún documento que avale lo anterior y solo se valió de las deposiciones del Ignacio Castro Covarrubias y del Sra. Leslie Briones Rojo, quienes afirmaron tales circunstancias. No obstante lo anterior, se incorporó, como ya se adelantaba, por la denunciante copia del organigrama del Ministerio Secretaría General de Gobierno, obtenida de su sitio web en la que se observa la dependencia de la Subsecretaría la Unidad de Asesoría Jurídica y de Acceso a la Información y copia de página web del Ministerio Secretaría General de Gobierno, con descripción de su estructura y organización, específicamente, las de la unidad jurídica del Ministerio en que en las tres funciones descritas están orientadas para asesorar al Ministro y la Subsecretaría y no se consigna ninguna que dé cuenta del asesoramiento de las Secretarías Regionales Ministeriales, ni menos, más específicamente, de realizar las funciones de los abogados de aquellos servicios.

Despejado lo anterior, se puede concluir, con la prueba incorporada al juicio que las labores que realizaba Paula Opazo Berríos como abogada de la Ministerio Secretaría General de Gobierno en la Secretaría Regional Ministerial de Valparaíso no es ejecutada por la unidad jurídica del Ministerio y por consiguiente



no existe duplicidad de funciones al tener al tener dicha unidad jurídica otra finalidad.

En este orden de ideas y sumado a lo anterior es preciso dejar por sentado que las resoluciones 272/495 y 272/821, de 12 de marzo y 10 de mayo que el Ministerio Secretaría General de Gobierno implementó un plan con la finalidad de redistribuir y unificar ciertas funciones en las Seremis Regionales y aprobando la estructura interna de las misma se refieren a unidades y departamentos específicos y en el caso de cargo de Paula Opazo Berríos como profesional sin adscripción a departamento o unidad específica de aquellas que hace mención las referidas resoluciones y en consecuencia dadas las funciones que realizaba dicha reorganización en estricto rigor no la afectaba.

Ahora bien, lo anterior debe unirse con la pregunta controvertida en este juicio ¿cuál fue el motivo del término anticipado de la contrata de Paula Opazo Berríos? Conforme lo que se viene argumentando y explicando, se puede colegir, que al no estar justificada la desvinculación de Paula Opazo Berríos, al acreditarse que las funciones que realizaba están alejadas de aquellas a las que debe dedicar la Unidad Jurídica de la Subsecretaría de la denunciada Ministerio Secretaría General de Gobierno y en consecuencia carece de asidero la afirmación contenida en la resolución que instruye el término anticipado de la contrata de la actora respecto de la duplicidad de funciones, se puede inferir, que de no mediar la adhesión política diversa a su jefatura se habría mantenido en su cargo, al constatarse sus buenas calificaciones y capacidad para el cargo; por el contrario y como ocurrió luego, al conocerse su posición política, fue poco a poco aislada y desplazada de sus tareas permitiendo, con ello, esconder en una resolución que a simple vista aparece como justificada, y como se demostró con una motivación distinta que fue por las razones ya expuestas que deriva en claros motivos discriminatorios.

Por lo anterior, la prueba en su conjunto analizada permitió en este juicio acreditar los indicios y lograr, en este sentenciador, la necesaria y suficiente convicción, que permitieron develar los verdaderos motivos para el término anticipado de la contrata de la denunciante Paula Opazo Berríos, lo que fue por motivos de discriminación en razón de su tendencia política, contrario a la dignidad de la persona conforme lo establecen nuestra bases institucionales de nuestra constitución establecida en el artículo 1² y 19 N° 16³, y refrendada en el artículo 2 del Código del Trabajo⁴, ejerciendo el empleador sus facultades sin justificación suficiente y desproporcionada y de esa manera limitando el pleno ejercicio de la mentada garantía, según lo dispone el inciso tercero del artículo 485 del Código del Trabajo.

En el mismo sentido, resultan de carácter grave al ser el empleador denunciado garante de la igualdad conforme ya se ha explicado. En consecuencia,

² Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos.

³ La libertad de trabajo y su protección (...) Se prohíbe cualquiera discriminación que no se base en la capacidad o idoneidad personal, sin perjuicio de que la ley pueda exigir la nacionalidad chilena o límites de edad para determinados casos.

⁴ Son contrarios a los principios de las leyes laborales los actos de discriminación. (...) Los actos de discriminación son las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en motivos de raza, color, sexo, maternidad, lactancia materna, amamantamiento, edad, estado civil, sindicación, religión, opinión política, nacionalidad, ascendencia nacional, situación socioeconómica, idioma, creencias, participación en organizaciones gremiales, orientación sexual, identidad de género, filiación, apariencia personal, enfermedad o discapacidad u origen social, que tengan por objeto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación.



se dará lugar a la denuncia impetrada por la actora y a la indemnización especial contemplada en el artículo 489 del código del ramo, en los términos que se expresará en la parte resolutive de la sentencia.

DECIMO CUARTO: Respecto de la procedencia de las indemnizaciones sustitutivas de aviso previo y por años de servicio y su recargo. Si bien el artículo 489 inciso tercero establece que en caso de acogerse la denuncia el juez ordenará el pago de la indemnización a que se refiere el inciso cuarto del artículo 162 -conocida como sustitutiva de aviso previo- y la establecida en el artículo 163 -referida al pago por los años de servicio-, con el correspondiente recargo de conformidad a lo dispuesto en el artículo 168, hay que considerar que estas indemnizaciones y recargos fueron establecidos de la manera que se expresan en razón de lo indicado en la misma norma en su inciso primero, esto es, producto de las vulneraciones que se hubieron producido con ocasión del despido a propósito de la acción que concatenadamente se ejercen en este procedimiento laboral, producto que cada vez que existe un despido con vulneración de derechos, irreparablemente, es uno indebido, injustificado o improcedente y está unido necesariamente con los derechos que le otorga la legislación laboral a los trabajadores regidos por el Código del Trabajo para recibir las indemnizaciones y recargos que hacen referencias las normas antes citadas.

Debe recordarse, por una parte y como ya se adelantaba al resolverse la incompetencia absoluta del Tribunal para conocer de la presente acción a propósito de la carencia de un procedimiento especial de tutela de derechos fundamentales en la legislación que reglamenta la relación entre funcionario público y el Estado, especialmente del Estatuto Administrativo Ley N° 18.834; Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado Ley 18.575; y Orgánica Constitucional de la Contraloría General de la República Ley 10.366, ya que todas éstas contemplan, en términos corrientes, los derechos de los funcionarios públicos y de los procedimientos por los cuales pueden ellos reclamar sus derechos en cuanto consideren arbitrarias las decisiones de sus superiores jerárquicos, muy distante de lo fines que se persiguen como de los derechos y garantías que se tutelan en este procedimiento.

Por lo anterior y conforme los establecen los artículos 1 y 420, letra a) del Código del Trabajo, ingresan los funcionarios públicos a este procedimiento en cuanto a la tutela de la garantía o derecho irrenunciable conculcado y no así de todos los derechos contenidos en el Código del Trabajo y especialmente a los que se refieren a las indemnizaciones por años de servicio y sustitutiva de aviso previo y el recargo de la primera, por estar proscritos a los funcionarios públicos.

En este orden de ideas, se rechazará la pretensión de la denunciada.

DECIMO QUINTO: En cuanto a la indemnización por lucro cesante. Los contratos a plazo fijo expiran por el cumplimiento del plazo convenido en el contrato y en caso de ruptura anticipada del vínculo debido a decisión injustificada del empleador, éste debe dar cumplimiento del contenido patrimonial de su cargo, pagando al dependiente las remuneraciones que le habrían correspondido por todo el periodo el contrato, como es en este caso en donde el termino anticipado de la contrata de Paula Opazo Berríos, ocurre por la vulneración de la garantía de no discriminación.



La legislación laboral no puede considerarse aislada de ordenamiento jurídico en que se encuentra enmarcada y, por ende, en las condiciones descritas, esto es, si el empleador no acreditó en los autos los supuestos fácticos que le permitan poner legítimo término anticipado a un contrato de duración determinada, debe estimarse que aquél lo incumplió por lo que deberá pagar al actor, a título de indemnización compensatoria las remuneraciones que éste último debió percibir hasta el vencimiento del plazo estipulado para la vigencia del contrato.

Se ha podido establecer que el contrato que vinculaba a la Ministerio Secretaría General de Gobierno y Paula Opazo Berríos era hasta el 31 de diciembre según la resolución de prórroga de contratación, de fecha 30 de noviembre de 2017.

La indemnización por lucro cesante debe ser equivalente a las remuneraciones correspondientes al período comprendido entre la fecha del termino anticipado de la contrata el día 16 de junio del año 2018 y el 31 de diciembre del año 2018, (6 meses 14 días) según lo que se determinará en el siguiente considerando y sin superar el solicitado por la actora.

DECIMO SEXTO: Base de cálculo. Última remuneración mensual. El inciso tercero del artículo 489 del Código del Trabajo establece en su parte pertinente que: *“...en el caso de acogerse la denuncia el juez ordenará (...) adicionalmente, a una indemnización que fijará el juez de la causa, la que no podrá ser inferior a seis meses ni superior a once meses de la última remuneración mensual...”*

Por su parte el artículo 172 del Código del Trabajo expresa, en su inciso primero que *“Para los efectos del pago de las indemnizaciones a que se refieren los artículos 168, 169, 170 y 171, la última remuneración mensual comprenderá toda cantidad que estuviere percibiendo el trabajador por la prestación de sus servicios al momento de terminar el contrato, incluidas las imposiciones y cotizaciones de previsión o seguridad social de cargo del trabajador y las regalías o especies valuadas en dinero, con exclusión de la asignación familiar legal, pagos por sobretiempo y beneficios o asignaciones que se otorguen en forma esporádica o por una sola vez al año, tales como gratificaciones y aguinaldos de navidad. (...) Si se tratare de remuneraciones variables, la indemnización se calculará sobre la base del promedio percibido por el trabajador en los últimos tres meses calendario.”*

La denunciante indicó en su libelo que la última remuneración correspondía a la cantidad de 1.897.801 y la denunciada negó, en términos generales tal hecho, sin indicar el monto que correspondía.

La denunciante aportó las liquidaciones de remuneraciones de los meses de marzo, abril y mayo que son los tres últimos meses completamente trabajados, en los que se consignan los totales haberes de \$3.449.053, \$1.919.263 y \$1.696.688, lo que arroja un promedio de \$2.354.994

Por las consideraciones antes expuestas y de conformidad a lo dispuesto en los los artículos 1 y 5 de la Constitución Política de la República; artículos 1, 2, 4, 5, 425, 432, 446, 485, 488, 489 y demás pertinentes del Código del Trabajo convenios N^{os} 3, 103 y 156 de la Organización Internacional de Trabajo, **SE DECLARA:**



I.- Que se **acoge** la denuncia interpuesta por doña **Paula Andrea Opazo Berríos**, en contra del **Fisco de Chile**, Consejo de Defensa en representación de la empleadora Ministerio Secretaría General de Gobierno, todos ya individualizados y en consecuencia se declara que el término anticipado de la contrata lo fue por motivos de discriminación en razón de su tendencia política, conforme lo dispone el artículo 485 inciso 2 en relación con el artículo 2 ambos del Código del Trabajo y se condena al pago de una indemnización de 8 remuneraciones equivalentes a \$18.839.952.

II.- Que se **acoge** la indemnización por lucro cesante y se condena al pago de la cantidad de \$12.335.706.

III.- Que **deberán** pagarse estas indemnizaciones con los intereses y reajustes conforme lo establece el artículo 63 y 173 del Código del Trabajo.

IV.- Que se **rechaza** las indemnizaciones por años de servicio y su recargo como la sustitutiva de aviso previo.

V.- Que se **condena** en costas a la denunciada, la que se regula en la suma de \$2.000.000.

VII.- **Devuélvase** a los intervinientes la prueba documental incorporada, la que deberá ser retirada dentro del plazo de 60 días corridos contados desde que la sentencia quede ejecutoriada bajo apercibimiento de su destrucción.

Regístrese, notifíquese a las partes en la forma que establece el inciso final del artículo 457 y 461 del Código del Trabajo y archívese en su oportunidad.

RIT: T-407-2018

RUC: 18-4-0127276-K

Dictada don **CAMILO OBRADOR CASTRO**, Juez suplente del Juzgado de Letras del Trabajo de Valparaíso.



A contar del 07 de abril de 2019, la hora visualizada corresponde al horario de verano establecido en Chile Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar dos horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>